

PAZ Y SEGURIDAD

VIOLENCIA Y ÓRDENES POLÍTICOS LOCALES EN EL POSACUERDO: LAS DINÁMICAS TERRITORIALES EN EL NORTE DEL CAUCA, EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO Y TUMACO

Juan Albarracín / Juan Pablo Milanese /

Margarita Navarro De Arco / Lizeth Sinisterra Ossa /

Inge Helena Valencia

Septiembre 2020



La presencia de economías ilegales como la minería de enclave extractivo, el cultivo de coca y actividades relacionadas con el procesamiento de cocaína está muy relacionada con el recrudecimiento de la violencia y es factor importante asociado a las dinámicas de violencia contra líderes sociales en el norte del departamento del Cauca, el bajo Cauca antioqueño y el municipio de Tumaco.



Este documento explora cómo estos mercados ilegales están regulados y de qué manera los actores armados participan de la construcción de órdenes sociales locales en estas periferias rurales.

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ACERCAMIENTO A LAS TRES DINÁMICAS LOCALES	6
2.1	El norte del Cauca.....	7
2.2	El bajo Cauca antioqueño.....	13
2.3	El municipio de Tumaco.....	20
3	REFLEXIONES FINALES	27
	BIBLIOGRAFÍA	29

1

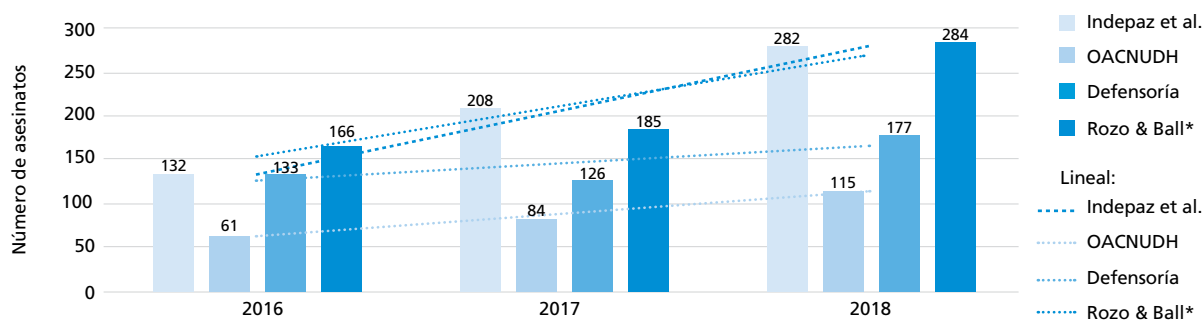
INTRODUCCIÓN¹

El asesinato de líderes y lideresas sociales en Colombia es una de las situaciones más preocupantes de la implementación del Acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre el gobierno nacional durante la presidencia de Juan Manuel Santos (2010-2014, 2014-2018) con la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), y muestra nuevamente la dificultad de cons-

truir paz y garantizar la participación política en todo el territorio colombiano. Como lo muestra la gráfica 1, entre 2016 y 2018 hubo entre doscientos sesenta y seiscientos veintidós asesinatos, cantidad que varía dependiendo de la fuente. En lo corrido de este 2020, setenta y un líderes han sido asesinados. Esta violencia ni siquiera ha disminuido en medio de la cuarentena impuesta

Gráfica 1

Asesinato de líderes sociales según diferentes registros, 2016-2018



Fuente: Albarracín, Milaneze, Valencia, 2020.

¹ Este documento, parte del proyecto “Violencia y órdenes políticos locales en el posacuerdo: análisis del asesinato de líderes sociales en Colombia”, presenta el primer informe de una serie de cuatro capítulos en los que se busca comprender y visibilizar las problemáticas asociadas a la violencia y los órdenes políticos locales en el marco del posacuerdo en el municipio de Tumaco, y en las regiones del norte del departamento del Cauca y el bajo Cauca antioqueño. En la segunda entrega se discutirá cómo la violencia ejercida en contra de las y los líderes sociales se relaciona con la configuración de órdenes sociales locales en estas tres regiones, antes y después del Acuerdo de paz, y su impacto en la violencia política y social observada en el posconflicto. Posteriormente, en el tercer artículo se explorarán los patrones de participación política (en particular electoral) en estos tres casos antes y después del Acuerdo de paz. Por último, en el cuarto documento se presentarán algunas recomendaciones para fortalecer la construcción de paz y la protección de líderes y lideresas sociales en los territorios.

por el gobierno nacional para contener la covid-19: desde el inicio de la cuarentena (el 25 de marzo de 2020) a mayo se han reportado veinticuatro asesinatos.

Para explicar esta violencia, con frecuencia el gobierno nacional y numerosos medios de comunicación masiva aducen la existencia de economías ilegales y la presencia de grupos armados criminales en los territorios donde ocurre. Según esta explicación, el asesinato de líderes sociales es el resultado de luchas por el control de mercados ilegales en regiones con cultivos de uso ilícito, donde se procesan drogas (en particular la hoja de coca y cocaína) o hay extracción minera ilegal. Aunque la existencia de economías ilegales y actores armados no estatales son parte de la explicación, reducir las causas de esta

violencia a solo la disputa por mercados ilegales lucrativos por parte de grupos armados criminales, desconoce cómo en regiones periféricas estos grupos participan de la construcción y el sostenimiento de órdenes sociales. En regiones tradicionalmente golpeadas por el conflicto, los grupos criminales no solo regulan la producción y el tráfico de mercancías ilegales. En muchas ocasiones y en conjunto con otros actores locales políticos, se constituyen en autoridades que determinan reglas de comportamiento e imponen sanciones, es decir, regulan el orden social local. Este comportamiento por parte de grupos criminales organizados o rebeldes no es nuevo y ha sido ampliamente estudiado tanto para el contexto colombiano como en otros países².

El asesinato de líderes sociales es otro caso más que muestra las formas irregulares de gobernanza y orden social de la periferia (en este caso, rural). Es por ello que iniciamos una investigación que busca caracterizar y explicar la violencia en contra de líderes y lideresas sociales en tres regiones de Colombia: el norte del Cauca, en el departamento del Cauca, el bajo Cauca, en el de Antioquia, y Tumaco en el departamento de Nariño.

En nuestro proyecto³ argumentamos que la presencia de economías ilegales –como el narcotráfico– o grupos criminales, no explica por sí sola la violencia en contra de los líderes de movimientos sociales. Mostramos que estos grupos no operan en un vacío y que es importante entender la naturaleza de los órdenes políticos en los municipios donde operan. Éliticos locales –tanto legales como ilegales– participan de la construcción y el sostenimiento de órdenes locales, muchas veces autoritarios.

Cuando hay un orden local estable creado conjuntamente por grupos criminales y actores políticos locales, los procesos de movilización social efectivos pueden ser percibidos como una amenaza (*challenger*) y son reprimidos violentamente. Esto ocurre particularmente en municipios donde el poder local está concentrado y donde existen fuerzas políticas emergentes –por lo general asociadas a movimientos sociales o de izquierda– que puedan cuestionar el orden local existente.

En nuestro análisis preliminar cuantitativo, que discutiremos a mayor profundidad en la segunda entrega de esta investigación, encontramos que el crecimiento en los cultivos de coca y el aumento de actividades relacionadas con la minería criminal están asociados a la ocurrencia de asesinatos de líderes sociales. Es decir, sí existe una relación entre la existencia de economías ilegales (en este caso, el cultivo de coca y la producción de cocaína) y la violencia en contra de movimientos sociales. Sin embargo, encontramos también que características de la política local están relacionadas con la violencia contra líderes sociales. Municipios en donde hay una mayor fragmentación electoral –que tomamos como un indicador de una mayor dispersión del poder– exhiben una menor probabilidad de observar asesinatos de líderes sociales. Por ello insistimos en que la violencia que se ejerce hacia las y los líderes sociales debe combinar un análisis que permita entender su relación con las dinámicas asociadas a las rentas ilegales, pero también a la configuración de los órdenes políticos locales.

Este documento presenta el primer informe de una serie de cuatro en los que se busca comprender y visibilizar las problemáticas asociadas a la violencia y órdenes políticos locales en el marco del posacuerdo en las tres regiones mencionadas: Tumaco, el norte del Cauca y el bajo Cauca antioqueño. Esta primera parte brinda un panorama general sobre los tres casos seleccionados y da cuenta de las dinámicas de violencia que se entretienen en estos territorios. Su objetivo es caracterizar las dinámicas territoriales de los tres casos para entender las particularidades regionales, los rasgos que comparten las tres regiones y algunas de sus dinámicas diferenciales.

2 Véanse, entre muchos otros, Nicholas Barnes y Juan Albaracín. 2020. *Criminal Governance in the Time of COVID-19*, <https://urbanviolence.org/criminal-governance-in-the-time-of-covid-19/>; Enrique Desmond Arias. 2017. *Criminal Enterprises and Governance in Latin America and the Caribbean*. Cambridge University Press. New York; Ana Arjona. 2016. *Rebelocracy: Social Order in the Colombian Civil War*. Cambridge University Press. New York; y Gustavo Duncan. 2014. *Más que plata o plomo. El poder político del narcotráfico en Colombia y México*. Debate. Bogotá.

3 Este proyecto de investigación, adelantado por la Universidad ICESI, cuenta con el apoyo del Instituto Colombo-Alemán para la Paz (CAPAZ) y la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol).

2

ACERCAMIENTO A LAS TRES DINÁMICAS LOCALES

El municipio de Tumaco y las subregiones del bajo Cauca antioqueño (seis municipios) y el norte del Cauca (trece) se caracterizan por ser lugares en donde el conflicto armado ha sido persistente. Estas subregiones comparten una serie de problemáticas marcadas por el recrudecimiento de la violencia, la presencia de grupos armados al margen de la ley, unas dinámicas importantes alrededor de economías ilegales como la minería ilegal de oro y el cultivo de coca y la producción, procesamiento y distribución de cocaína.

Aproximadamente desde el inicio de los años sesenta, estos territorios, caracterizados por ser sobre todo rurales y estar en posiciones geográficas estratégicas, se han visto sumidos en las guerras internas por el control territorial. Cabe resaltar que estos espacios son de especial importancia para los grupos armados, ya que su posición territorial permite la conexión de zonas de producción con lugares para la intermediación, y también la posibilidad de exportación y comercialización en otras regiones del país que demandan mercancías distribuidas para el consumo interno. En este sentido, se puede afirmar que las economías ilegales a gran escala y el enfrentamiento entre los grupos armados organizados y el Estado han sido determinantes para la generación de conflictos internos en estos territorios, en donde han quedado miles de víctimas de desplazamiento forzado, masacres y asesinatos a líderes y lideresas sociales.

Este tipo de violencias se han podido identificar en el municipio y las regiones estudiadas, en donde el control territorial y la concentración de la tierra ha sido uno de los mayores problemas para sus pobladores. Sin embargo, además de las economías ilegales, las economías legales también desempeñan un papel fundamental, pues las grandes compañías mineras, ganaderas y agroindus-

triales y los dueños de grandes extensiones de tierra, han constituido monopolios, acompañados históricamente por grupos paramilitares. Asimismo, los grupos paramilitares que se han desmovilizado o han cambiado sus estructuras, han mutado en el fenómeno de las Bacrim (bandas criminales), que, junto a las disidencias de las Farc y guerrillas actualmente activas como el Ejército de Liberación Nacional (ELN), mantienen disputas que desencadenan grandes oleadas de violencia.

Aunque el municipio de Tumaco (Nariño) y las regiones del norte del Cauca (Cauca) y el bajo Cauca (Antioquia), pertenecen a departamentos distintos, las dinámicas de violencia que se han generado en los veinte municipios que componen la zona de estudio comparten algunas similitudes. Por ejemplo, además del recrudecimiento de la violencia y la presencia de economías ilegales, desde la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016 se dio inicio a la implementación tanto de los Programas de desarrollo con enfoque territorial (PDET) como del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (PNIS). Según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y Delito (Unodc: United Nations Office on Drugs and Crime), durante 2017 el cultivo de coca en Colombia alcanzó la extensión más alta jamás registrada: 171.000 hectáreas. Los departamentos de Antioquia, Putumayo, Norte de Santander y Cauca tuvieron el mayor aumento en el área cultivada, con alrededor del 64% (Unodc, 2017). Sin embargo, a pesar de la apuesta por la paz por parte del Estado, y que asuntos como la reforma rural integral o los procesos de sustitución voluntaria eran pilares del Acuerdo, actualmente encontramos una situación muy diferente respecto a lo proyectado en el Acuerdo de paz. A ellos se suma que, en los últimos dos años, se crearon las Zonas estratégicas de intervención integral (ZEI o zonas futuro), que retoman un enfoque militar de

acuerdo con la idea de estabilización, para generar de nuevo intervenciones en los municipios priorizados para la implementación (*Colombia Informa*, 2020; *El Tiempo*, 2016). De esta manera, el gobierno del presidente Iván Duque (2018-) retomó un enfoque de intervención militar, volvió a la erradicación forzada y algunos de estos municipios siguen a la espera de ser reparados en materia de restitución de tierras, acompañamiento policial y generación de estrategias que contribuyan a detener el asesinato a líderes y lideresas sociales.

A continuación presentamos la caracterización detallada de las dos regiones estudiadas, así como la del municipio de Tumaco.

2.1 EL NORTE DEL CAUCA

El departamento del Cauca está ubicado en el suroccidente colombiano, entre la región Andina y Pacífica (véase el mapa 1), y está conformado por cuarenta y dos municipios, divididos en cinco regiones: Centro, Norte, Occidente, Oriente y Sur. De acuerdo con el Departamento Nacional de Planeación (DNP, 2018), el Cauca representa 3% de la población total del país, con 1'464.488 habitantes, siendo el quinto departamento con mayor población concentrada en las zonas rurales, con 751.274 personas (60,4%), mientras que la zona urbana cuenta con 492.229 habitantes (39,6%). En el norte del Cauca habita cerca del 29,2% del total de la población del departamento, y la región está conformada por trece municipios: Buenos Aires, Caldoño, Caloto, Corinto, Guachené, Jambaló, Miranda, Padilla, Puerto Tejada, Santander de Quilichao, Suárez, Toribío y Villa Rica.

La zona nortecaucana, a pesar de concentrar una gran cantidad de población indígena, mestiza y afrodescendiente, tiene una distribución étnico-territorial diferenciada. Mientras los territorios indígenas se ubican predominantemente en las zonas altas, las poblaciones mestizas y campesinas están distribuidas en el piedemonte y la población afrodescendiente, que constituye la mayoría, históricamente se ha ubicado en la zona plana y en la parte alta de la vertiente occidental, compartiendo en muchos casos el territorio con las poblaciones indígenas. Esta división de las dos subregiones (plana y

alta) se debe particularmente a la diferenciación en la vocación del suelo. Mientras en la parte alta predomina la agricultura de pan coger y la minería, en la zona plana se concentran el monocultivo de caña de azúcar y la zona industrial.

Los municipios que se ubican en la parte plana son Puerto Tejada, Villa Rica, Guachené y Padilla; los que tienen tierras en la zona plana y montañosa son Miranda, Corinto, Caloto, Caldoño, Santander de Quilichao, Suárez y Buenos Aires. En cambio, Toribío y Jambaló se encuentran en la zona montañosa.

Para Sánchez (2015), los municipios de la zona plana nortecaucana están inmersos en la expansión cañera, lo cual ha generado que la población se enfrente a unos impactos paradójicos: por un lado, se ha propiciado un desarrollo económico que ha posibilitado la ampliación de la infraestructura local, la generación de empleo y la realización de inversiones, y, por otro, se ha tenido que vivir en medio de procesos sistemáticos de destierro y acaparamiento de tierras por parte de los ingenios azucareros. De esta manera, la transformación histórica del norte del Cauca ha decantado procesos de poblamiento y construcción territorial; formas y relaciones de producción; y relaciones interétnicas y formas de dominación, despojo y resistencia, cuyos rasgos y particularidades han permitido que se consolide como una región, más allá de los límites políticos del departamento.

La región ha sido una en donde han sido persistentes las dinámicas de la violencia y el conflicto armado. Una de las explicaciones para entender la intensidad de las dinámicas de la violencia puede tener relación con que este territorio cuenta con una importancia geoestratégica, ya que es un punto crucial para el desarrollo y la expansión de las economías ilícitas y de los grupos armados. La región es un corredor fundamental para llegar a Cali (la tercera ciudad más grande del país) y permite el acceso a la región Pacífica, posibilitando la entrada y salida ilícita de drogas y armas. Integrándose así toda la cadena productiva del narcotráfico: cultivos de uso ilícito, laboratorios para el procesamiento de la coca y su transformación en cocaína, y rutas para su tráfico, además del de la marihuana, un producto que se ha valorizado fuertemente en los últimos años, por el incremento de la

Mapa 1
Subregión del norte del Cauca (Cauca)



demanda, y por el cual hay diferentes intereses y disputas para su comercialización y control.

2.1.1 Estructura socioeconómica

En el norte del Cauca es importante mencionar que estructuras económicas legales e ilegales han sido partícipes de muchas de las acciones violentas y de los procesos de despojo de las comunidades en los diferentes municipios. Entre 1990 y 2010 la región fue impactada económicamente por varias situaciones, a saber: 1) la expansión del cultivo de caña de azúcar; 2) el desarrollo de la industria apoyada por el Estado a partir de la ley Páez⁴; 3) el resurgimiento de la minería ilegal; y 4) el gran crecimiento en el cultivo de coca y, posteriormente, de marihuana (Guzmán y Rodríguez, 2014).

De acuerdo con la Cámara de Comercio del Cauca (2019), gran parte del sector económico del departamento gira alrededor de la producción agrícola y la ganadería, haciendo que los sectores más representativos de la economía de la región sean la industria y la agroindustria, representada en el cultivo de la caña de azúcar y, en menor medida, el comercio y la agricultura (Martínez, 2018). El cultivo de la caña, a pesar de haber contribuido a un importante crecimiento económico, también ha tenido impactos negativos, reflejados en los procesos de despojo y en lo que estos contribuyen a la inseguridad alimentaria. Por ejemplo, en un documento de la Asociación de Municipios del Norte del Cauca (Amunorca), titulado “Agenda regional nortecaucana para el desarrollo sostenible 2005-2019”, se muestra que, de las áreas aptas para el cultivo de alimentos, en Puerto Tejada el 95,8% se usa en la producción de caña y el 4,2% restante para alimentos; en Padilla el 90,52% en caña de azúcar y 3,45% en yuca, plátano y maíz; en Villa Rica el 58% en caña; y en Corinto 73,5% en caña y 26,5% en cultivos de uso ilícito. Lo anterior refleja el paso de una región con una tradición económica cam-

pesina y de pan coger a una región con una estructura productiva basada en relaciones salariales y capitalistas con orientación exportadora bajo la producción agroindustrial de azúcar y, más tarde, de etanol.

Por otro lado, los cultivos de uso ilícito se han ido arraigando intensamente en la región: la zona rural entre Corinto, Miranda y Toribío es considerada “el triángulo de oro” de la marihuana (Semana, 2018), y actualmente está siendo disputada por las disidencias de las Farc-EP y por otras organizaciones asentadas en esta zona. Para Unodc (2017), la producción de marihuana se localiza en treinta y seis de los cuarenta y dos municipios del departamento, entre los que se destacan Toribío, Corinto, Caloto y Miranda, en los que se observa la presencia de invernaderos para la producción de marihuana, al igual que en algunas zonas planas en Santander de Quilichao y en sectores montañosos de Jambaló, Buenos Aires y Suárez.

En cuanto a la minería del oro, en la región es posible encontrar un importante desarrollo de esta actividad. Desde el desarrollo de la minería asociada a la hacienda, pasando por la que realizan poblaciones afrodescendientes como forma tradicional de subsistencia, actualmente nos encontramos frente a un gran conflicto: el uso que le dan actores armados a la minería como fuente de financiación de conflictos. El auge de los precios del oro ha ocasionado el aumento en la minería legal e ilegal en un contexto con presencia de grupos armados al margen de la ley.

La minería legal e ilegal, sumada a las disputas territoriales relacionadas con proyectos macro y la explotación de recursos naturales, son factores que posibilitan el rearme y fortalecimiento de estructuras criminales. Además, las actividades económicas de las dos subregiones nortecaucanas (zona plana y alta), que oscilan entre la caña de azúcar y la minería, dos actividades predominantes en la historia de la región, han traído como consecuencia múltiples acciones violentas en contra de la comunidad.

⁴ A mediados de la década de los noventa, el gobierno del presidente Ernesto Samper Pizano (1994-1998) promulgó ley 218 del 17 de noviembre de 1995, conocida como la ley Páez, como mecanismo de reactivación económica regional después de la devastación causada por el desbordamiento del río Páez el 6 de junio de 1994.

2.1.2 Dinámicas del posconflicto

Es importante señalar que la firma del Acuerdo de paz entre el gobierno nacional y las Farc-EP en noviembre

de 2016 no significó el cese de las conflictividades y las violencias generadas en el territorio, ya que organizaciones indígenas, campesinas y afrodescendientes denuncian que desde la firma del Acuerdo se intensificaron las agresiones y violaciones a los derechos humanos (Pacifista, 2020). De acuerdo con el informe “Situación de los derechos humanos en el departamento de Cauca. Informe ejecutivo”, de la Defensoría del Pueblo (2018), en algunos de sus territorios emergieron disidencias de las Farc-EP. El ELN también ha buscado ampliar su influencia copando los territorios dejados por la exguerrilla, para lograr así conectar sus frentes de la costa Pacífica y aumentar su presencia en el Cauca. Del mismo modo, grupos armados posdesmovilización paramilitar, como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), entre otras organizaciones criminales, ejercen una fuerte presión en los municipios, con un accionar centrado asimismo en desarticular los procesos sociales⁵.

En el contexto de la firma del Acuerdo de paz, el norte del Cauca es una región de especial importancia, ya que aquí se está implementando uno de los dieciséis Planes de desarrollo con enfoque territorial (PDET) de Norte del Cauca y Alto Patía⁶. Recordemos que los Programas de desarrollo con enfoque territorial se diseñaron y elaboraron con mecanismos de construcción participativa, buscando la solución de los problemas más apremiantes de las comunidades agrarias, con la intención de cerrar las brechas urbano-rurales y aportar al desarrollo territorial. Aquí es importante mencionar que desde la llegada

del presidente Iván Duque al poder, varios programas y proyectos relacionados con el Acuerdo de paz, tales como los Programas de desarrollo con enfoque territorial o los procesos de sustitución de cultivos ilícitos, han comenzado a ser desfinanciados⁷, lo que demuestra la poca voluntad política de su gobierno para cumplir con el Acuerdo de paz (*El Espectador*, 2019). Si bien en lo que respecta a los Programas de desarrollo con enfoque territorial se han firmado los Planes de acción para la transformación regional, sigue la interrogante acerca de cuántas iniciativas se desarrollarán este año y cuántos recursos se destinarán a su ejecución, lo cual todavía no es claro.

Por otro lado, la sustitución de cultivos en el territorio no se está cumpliendo, ya que aun cuando campesinos de municipios como El Tambo fueron de los primeros en firmar un acuerdo colectivo para la sustitución voluntaria, a otros catorce municipios afectados se les dijo que no podrán entrar al programa (Pares, 2018), y a quienes lograron firmar el acuerdo colectivo se les han incumplido los tiempos de los pagos, además de haberse hecho la erradicación sin haber llegado a la sustitución (Pacifista, 2019).

En el informe “Colombia: monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018” (Unodc, 2019) se evidencia una serie de incumplimientos por parte del actual gobierno. Cuando se hizo el informe, había 99.097 familias vinculadas al programa y se habían erradicado voluntariamente 29.043 hectáreas de coca. Las familias inscritas no habían recibido la totalidad de los pagos acordados y al menos cuarenta mil no habían recibido ni uno solo. La Unodc destaca asimismo la baja tasa de resiembra de cultivos de uso ilícito en las zonas donde se han implementado los programas de sustitución, 0,6%, mientras que en zonas donde se adelantan programas de erradicación forzada la tasa

5 Este tipo de estrategias violentas para establecer las formas de gobernanza criminal en estas regiones se verán más específicamente en el segundo documento, sobre las formas de orden social local en estas tres regiones –antes y después del Acuerdo de paz– y su impacto en la violencia política y social observada en el posacuerdo.

6 La zona PDET Norte del Cauca y Alto Patía comprende los siguientes municipios: Florida y Pradera, en el departamento del Valle del Cauca; Argelia, Balboa, Buenos Aires, Cajibío, Caldono, Caloto, Corinto, El Tambo, Jambaló, Mercaderes, Miranda, Morales, Patía, Piendamó, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío, en el Cauca; y Cumbitara, El Rosario, Leiva, Los Andes y Policarpa, en el departamento de Nariño. Los veinticuatro municipios están ubicados a lo largo de tres cuencas hidrográficas: Patía, Cauca y San Juan de Micay, y albergan tres Parques Nacionales Naturales: Nevado del Huila, Las Hermosas y Munchique.

7 Durante el gobierno del presidente Duque, las principales entidades que trabajan en los territorios Programas de desarrollo con enfoque territorial han tenido recortes presupuestales. “Según el proyecto de presupuesto 2020, la Agencia Nacional de Tierras sufriría una reducción del 19 por ciento, la Agencia para el Desarrollo Rural del 13, la Agencia de Renovación Territorial del 10 y la Agencia para la Reincorporación y Normalización del 7” (*Semana*, 2019).

de resiembra es de 35%. No obstante, a pesar de la evidencia, el gobierno sigue promoviendo la estrategia de la erradicación forzada.

De igual forma, en los espacios antes denominados Zonas veredales transitorias de normalización del Cauca, llamados ahora Espacios territoriales de capacitación y reincorporación (ETCR), ubicados en Buenos Aires (El Cedral), Caldono (Los Monos), Miranda (Monterredondo) y Patía (El Estrecho), los excombatientes no han contado con recursos suficientes para sus capacitaciones. Además de esto, se encuentran en una constante situación de peligro ante los asesinatos, que hasta junio de 2019 alcanzaban a ciento cincuenta y tres, y la iniciativa del gobierno de reubicar algunos Espacios territoriales de capacitación y reincorporación, incluyendo dos del Cauca, ha aumentado la sensación de inseguridad e incumplimiento (*El Espectador*, 2019a).

2.1.3 Violencia en contra de líderes

En los últimos años la violencia en el norte del Cauca se ha transformado como resultado de la firma del Acuerdo de paz. Como bien lo señalan varios líderes de la región, la guerra y la violencia se han mantenido e, incluso, se exacerbaron y agudizaron las amenazas y los asesinatos a las y los líderes sociales (véase el mapa 2).

En las entrevistas que hicimos como parte de nuestro trabajo de campo antes de la pandemia, algunos de los entrevistados afirmaron que el asesinato de los líderes sociales en la región se relaciona con la persecución a cualquier iniciativa que tenga que ver con la defensa de los derechos. En este sentido, durante la investigación encontramos que en los últimos años en el norte del Cauca ha habido un aumento sistemático no solo de confrontaciones armadas, sino también de acciones violentas. Por tanto, para entender las dinámicas actuales del conflicto armado en la región y el recrudecimiento de la violencia en contra de líderes y lideresas sociales, existen cuatro aspectos que se deben tener en cuenta: primero, el aumento de las disputas territoriales y los asesinatos selectivos, sobre todo en corredores estratégicos como el del río Naya, donde circula la economía ilegal asociada principalmente al narcotráfico y la mine-

ría⁸. El Naya es un punto estratégico para el desarrollo de rentas ilegales, y allí los grupos criminales se encuentran en disputas internas y externas por el control del área, el manejo de los precios de materias primas e insumos y el monopolio de eslabones del procesamiento y obtención de alcaloides (Red de Derechos Humanos del Suroccidente de Colombia, 2020).

Segundo, la reconfiguración de grupos armados ilegales a partir del fortalecimiento de las disidencias de las Farc-EP y otros actores, reconfiguración mediante la cual ha aumentado la transnacionalización del narcotráfico, que impacta con fuerza el norte del Cauca (*Verdad Abierta*, 2018). De acuerdo con un informe de la Red de Derechos Humanos del Suroccidente Colombiano (2020), en el departamento del Cauca y el norte del mismo ha sido constante la presencia y expansión de actores armados como, por ejemplo, el ELN (frente de guerra Suroccidental: frente José María Becerra, compañía Lucho Quintero; frente Manuel Vásquez Castaño, compañía Camilo Cienfuegos; compañía Milton Hernández Ortiz), el Ejército Popular de Liberación (EPL) (los Pelusos); y paramilitares: Clan del Golfo, Águilas Negras. Asimismo, de otros grupos, denominados por parte de la institucionalidad como grupos armados organizados residuales y conocidos como disidencias de las Farc-EP: Jaime Martínez, Carlos Patiño, Dagoberto Ramos, Segunda Marquetalia y Jacobo Arenas. Estos últimos, surgidos y fortalecidos ante el incumplimiento progresivo del Acuerdo de paz y la incapacidad estatal para actuar permanentemente en territorios abandonados tras la dejación de armas de la guerrilla.

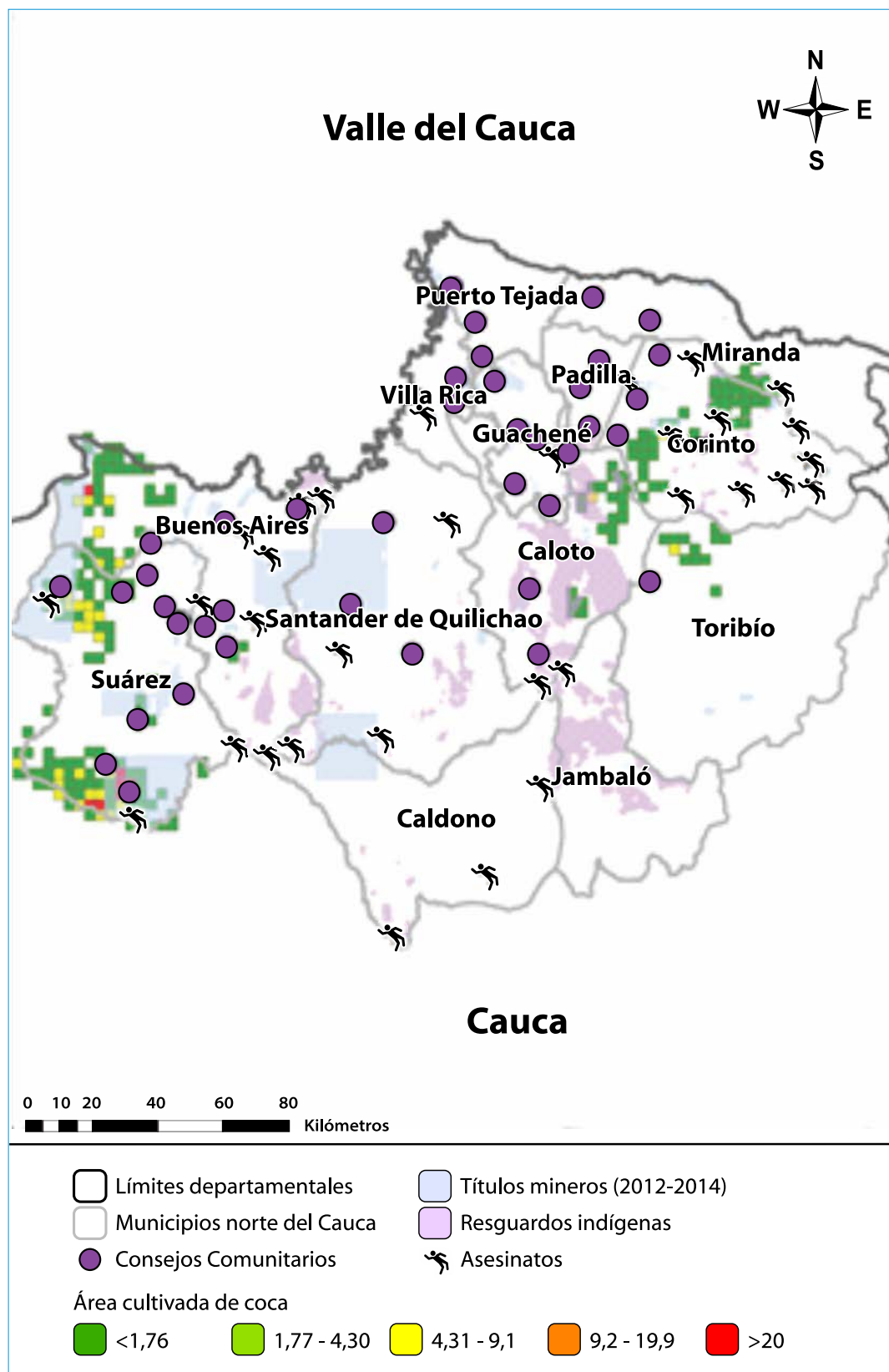
Tercero, se debe comprender la correlación entre los actos violentos en contra de líderes sociales y la implementación del Acuerdo de paz. Muchos de los líderes asesinados, incluso en el marco de la pandemia, pertenecen a

8 La ruta del Naya incluye diez municipios: cuatro que comunican el centro con el norte y la costa Pacífica colombiana: Cajibío, Morales, Suárez y Buenos Aires, en los cuales se presenta una alta permanencia de cultivos, especialmente el cultivo de la hoja de coca; cinco del nororiente del Cauca: Miranda, Corinto, Toribío, Jambaló y Caloto, territorios que cuentan con la presencia cultivos de marihuana; y uno de la costa: López de Micay, atravesado por el río Naya y que conduce directamente al océano Pacífico.

Mapa 2

Asesinatos a líderes y lideresas sociales, 2017 y 2018 -

Consejos Comunitarios y resguardos indígenas 2016 en el norte del Cauca



Fuente: Heinrich Böll Stiftung, Indepaz, 2018.

procesos u organizaciones que están defendiendo o hacen parte de la implementación del Acuerdo, de la sustitución voluntaria de cultivos de uso ilícito, del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito o de los Programas de desarrollo con enfoque territorial.

Aquí es importante mencionar que según Coljuristas (2018) el asesinato selectivo de líderes sociales en los departamentos de Cauca, Valle y Nariño tiene una correlación con la implementación de los Programas de desarrollo con enfoque territorial. El informe indica que 47,18% de los municipios donde han ocurrido dichos asesinatos han sido priorizados como Programas de desarrollo con enfoque territorial; además, encuentra que 56,15% del total de asesinatos desde la firma del Acuerdo de paz han ocurrido en municipios priorizados para la implementación de dichos Programas. En el norte del Cauca cada año aumenta esta relación: “en 2016 el 30,76% de los homicidios se cometieron en municipios Programas de desarrollo con enfoque territorial, en 2017 fueron el 50,02% de los homicidios y en 2018 el 66% de los homicidios ocurrieron en estos municipios” (Coljuristas, 2018: 70). Cabe señalar que la zona con Programas de desarrollo con enfoque territorial del norte del Cauca comprende los siguientes municipios: Buenos Aires, Caloto, Corinto, Jambaló, Miranda, Santander de Quilichao, Suárez y Toribío (Agencia de Renovación del Territorio, s. f.). Por tanto, en municipios nortecaucanos como Caloto, Corinto, Suárez y Toribío es en donde más asesinatos se cometen.

Finalmente, encontramos que las lógicas de seguridad que se están reinstaurando en el norte del Cauca, como, por ejemplo, proyectarla como zona futura o zona estratégica de intervención integral o especial, aumentan nuevamente la violencia. En este contexto de transición inestable, en el que se encuentran muchas zonas del país, en el actual gobierno ha ganado fuerza la idea de la estabilización, entendida como un conjunto de medidas y planes que se proponen restaurar la seguridad y sentar las bases para la reconstrucción económica. Pero como bien lo señalan varios líderes de la región, las políticas de estabilización no han sido la solución para enfrentar la dinámica de reconfiguración del conflicto armado. Buena parte del pie de fuerza que se ha llevado a la región se ha asentado en corredores estratégicos por

donde transita el narcotráfico, en donde a pesar de esa creciente presencia militar no ha habido cambios.

Desde que empezó la cuarentena nacional por la covid-19, la tercera semana de marzo, y hasta junio de 2020, la violencia en el Cauca deja un saldo de más de veinte personas asesinadas y cinco masacres cometidas (Las2Orillas, 2020). Los grupos armados ilegales están aprovechando esta emergencia sanitaria para posicionarse y buscar un grado de legitimidad a partir de controles de movilidad de la población, como una estrategia de control social y territorial en varios municipios caucanos. Desde 2018 en el departamento se viene incrementando la guerra, así como la reorganización y disputa de grupos armados por los distintos municipios. Por lo tanto, la actual crisis que vive Colombia por la covid-19 y las medidas de aislamiento, “han generado un incremento en la vulnerabilidad de las comunidades, un fortalecimiento de los grupos armados y una mayor degradación en los métodos empleados por estos últimos” (Las2Orillas, 2020).

2.2 EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO

El bajo Cauca es una subregión situada en el nororiente del departamento de Antioquia, en las estribaciones de la cordillera Central antioqueña (véase el mapa 3). Sus seis municipios –Cáceres, Caucasia, El Bagre, Nechí, Tarazá y Zaragoza– ocupan una extensión de 8.485 km² y de acuerdo con datos de 2017 tienen una población aproximada de 311.881 habitantes (IPC, s. f.). La subregión cuenta con cuarenta y siete comunidades indígenas y sesenta y tres comunidades afrodescendientes, distribuidas en las áreas urbanas y rurales de sus municipios; asimismo con ocho Consejos Comunitarios y cuatro resguardos indígenas con territorios titulados (García, 2018).

Esta subregión se caracteriza por su posición geoestratégica:

El bajo Cauca es una región estratégica por sus conexiones geográficas. La atraviesan el río Cauca y la carretera troncal nacional 25, que une a Medellín con Montería y el Caribe. Al occidente tiene el nudo del Paramillo, lleno de coca, que conecta con Urabá y Chocó, en dos corredores que conducen tanto al mar Caribe como al océano Pacífico (Semana, 2019a).

Mapa 3
Subregión del bajo Cauca (Antioquia)



Altura

-28 - 200	501 - 1.000	2.001 - 3.000	4.001 - 5.000
201 - 500	1.001 - 2.000	3.001 - 4.000	>5.000
Bajo Cauca	Límites departamentales		
Centros urbanos			

Esta característica es crucial para entender los fenómenos sociales, políticos y económicos que se presentan allí.

Los inicios del poblamiento de esta zona se deben a la explotación minera, ya que la subregión está atravesada por los ríos Cauca y Nechí. Los migrantes llegaban a trabajar en la minería ilegal, aun cuando el territorio ya estaba siendo explotado por compañías multinacionales que se dedicaban a la explotación minera, a lo que se suman grandes haciendas dedicadas a la ganadería a gran escala. En cuanto al Estado, había delegado el control del territorio a los administradores de unas y los propietarios de las otras (Fundación Ideas para la Paz, 2011). De esta manera, los procesos de poblamiento se dieron por invasiones a estas propiedades privadas y a las zonas aledañas a los ríos, y mediante el voz a voz se difundió la narrativa de la explotación del oro y la plata hacia zonas cercanas. Lo cual llevó al aumento de la población migrante durante el siglo veinte, específicamente a finales de los años treinta, sobre todo proveniente de la costa Caribe, la costa Pacífica y otras zonas de Antioquia (García, 2018: 55).

Este proceso de poblamiento llevó a que el ordenamiento territorial de las comunidades allí asentadas careciera de buena infraestructura y servicios públicos. Solo a partir de los años setenta y ochenta, el Estado empezó a prestarle atención a la zona, debido al aumento del precio del oro. Fue entonces cuando comenzaron a valorarse los recursos auríferos presentes en la subregión, así como su importancia geográfica para la construcción de rutas de conexión vinculadas al proyecto de modernización del país (Fundación Ideas para la Paz, 2011; García, 2018).

Los grupos armados tienen una larga historia en la subregión y han sido uno de los actores clave para la configuración de las formas de vida en estos municipios. Su presencia en el bajo Cauca data de los años sesenta, siendo el ELN el primer grupo armado contemporáneo, con el frente Camilo Torres, en hacer presencia en la zona, desde finales de esa década. Al igual que mineros y ganaderos, los grupos armados buscan el control de la zona debido a su posición geoestratégica. Inicialmente, la estrategia de control territorial del ELN buscaba inte-

grar a las comunidades: “(...) para ello promovieron la discusión comunitaria y la aplicación de un reglamento de uso racional de las minas, de distribución de la tierra y de control y manejo del ambiente (...)” (Fundación Ideas para la Paz, 2011). Más adelante, en 1967 el EPL hizo presencia en la zona con el frente Francisco Garnica, y hacia los años ochenta entraron las Farc con los frentes 5, 18 y 36, tomando el control del territorio que había dejado el ELN, que no había desaparecido totalmente, pero sí estaba debilitado y con menos presencia en la zona (Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH, 2006).

A raíz de la gran presencia de las guerrillas en la subregión, a partir de la década de los ochenta se configuró una guerra interna por el control del territorio y sus recursos y, sobre todo, una lucha constante entre las guerrillas y las empresas privadas y hacendados, que recurrían a grupos parapoliciales y paramilitares para proteger la actividad minera y ganadera, ya que para la época se iniciaron ataques en contra de la población civil y empresas como Mineros de Antioquia. En el mismo periodo de los ochenta se observa la incursión de grupos paramilitares como Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN) comandados por los hermanos Castaño, grupos que hacia finales de los años noventa se transforman en las Autodefensas Unidas de Colombia. En 2000 fueron creados el bloque Mineros y el bloque Central Bolívar, y ambos empezaron a ejercer control en toda la subregión, fortaleciéndose de este modo la presencia de los paramilitares (Fundación Ideas para la Paz, 2011).

Durante el primer gobierno del presidente Álvaro Uribe Vélez (2002-2006) se iniciaron los procesos de desmovilización de estos grupos paramilitares; sin embargo, sus disidencias y nuevos actores criminales se unieron para formar las bandas criminales que siguen disputándose el control del territorio. Para contrarrestar el fenómeno de las Bacrim, desde septiembre de 2009 el gobierno nacional creó el Comando operativo especial del bajo Cauca, una articulación entre la Policía Nacional, el Cuerpo Técnico de Investigaciones de la Fiscalía General de la Nación (CTI), el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS) y el Ejército (Fundación Ideas para la Paz, 2011).

2.2.1 Estructura socioeconómica

Según la Encuesta de calidad de vida para Antioquia de 2013 (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019), la subregión del bajo Cauca antioqueño presenta el índice de calidad de vida (ICV) más bajo de todo el departamento, con 47,8 puntos, y 49,4% de sus hogares están en condición de pobreza. De acuerdo con las condiciones socioeconómicas que presenta el bajo Cauca y dada su posición geoestratégica, desde hace unas décadas allí se presentan una serie de dinámicas que giran en torno a las economías legales, ilegales y a la informalidad.

La Fundación Ideas para la Paz (2011) señala cuatro grandes esferas desde donde se mueve la economía en el bajo Cauca: 1) la producción de cocaína; 2) la minería legal e ilegal; 3) la agricultura y la ganadería; y 4) la tenencia de la tierra. Las plantaciones de coca son uno de los mayores problemas en la subregión, a pesar de que el Estado ha venido incrementando la erradicación manual, la fumigación y programas de sustitución por parte del campesinado de cultivos de coca a plantaciones de cacao. Sin embargo, debido a la falta de oportunidades de comercialización, de acceso a vías y la mayor rentabilidad de los cultivos de uso ilícito, los campesinos prefieren seguir con las plantaciones de coca, trabajando como raspachines, en cristalizaderos o como transportadores, entre otras actividades.

La ubicación geoestratégica del bajo Cauca hace de la región un nodo importante para el negocio del narcotráfico, ya que permite la conexión con el norte, el sur y el centro del país. No solo es una región con cultivos y producción de cocaína: su conexión con los santanderes lo vuelve un punto importante para transportar droga hacia Venezuela; además, su cercanía con el Caribe colombiano le brinda una salida al mar. Finalmente, la precaria presencia estatal permitió la construcción de pistas de vuelo. La centralidad de la región en el negocio del narcotráfico ha incentivado a los grupos armados a intentar ejercer el control sobre la zona y, de esta manera, ha llevado a constantes enfrentamientos por el control del territorio (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012).

La subregión se caracteriza por una larga tradición minera y ganadera: “De la superficie total del bajo Cauca, el 49% (415.719 hectáreas) están cultivadas en pastos para el levante y ceba de ganado bovino, lo que demuestra la dimensión que la ganadería tiene en la región” (Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 2012: 21). Antioquia es el departamento con mayor producción minera de Colombia, al representar 43,8% de la producción nacional de oro. El bajo Cauca es la subregión en donde mayor producción minera se presenta: así, el municipio de El Bagre produce 50% del oro de la región, seguido por Zaragoza con 20%. Además, la subregión produce 65% de la plata en el país (Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 2019). Mineros S. A. ha sido históricamente la empresa privada que tiene el control monopólico de la extracción del oro y otros recursos naturales. Sin embargo, la explotación minera la realizan también de manera artesanal los pobladores y las comunidades ribereñas, y la minería ilegal constituye gran parte de la actividad económica de este territorio: “existen unas 1.200 unidades de explotación minera de carácter informal, de las que dependen unas 45 mil personas, bien por empleos directos o bien por vinculación indirecta” (*Verdad Abierta*, 2015).

Los grupos armados de la zona vieron en la minería ilegal otra fuente de ingresos y para ello han recurrido al desplazamiento forzado, la subordinación y las amenazas constantes a la población civil, además de utilizar métodos como bombas para la explotación de la tierra y causar daños constantes al medioambiente en sus actividades extractivas.

En cuanto a la agricultura, los cultivos de arroz y cereales son preponderantes, y “los cultivos de largo rendimiento, tales como el cacao y el caucho, han empezado a adquirir importancia “debido a los programas de sustitución de cultivos y a los proyectos productivos de los desmovilizados”” (Fundación Ideas para la Paz, 2011: 14)

La tenencia de la tierra en la subregión ha generado una serie de problemáticas, tanto para pequeños como para grandes campesinos y productores, debido a que gran parte de las tierras se encuentra concentrada en algunas pocas familias y a que la mayor parte de los pre-

dios no cuentan con la respectiva titulación, lo cual ha desencadenado la ocupación transitoria de tierras para la siembra: “El primer escollo es que el 53% de los predios carecen de matrícula inmobiliaria y ellos equivalen al 30% de los predios en el área rural (...)” (Fundación Ideas para la Paz, 2011: 15).

2.2.2 Dinámicas del posconflicto

Los seis municipios del bajo Cauca antioqueño forman parte de los Programas de desarrollo con enfoque territorial. Con el PDET allí se busca atender las principales necesidades de las comunidades, y en él participan el gobierno nacional, numerosas empresas privadas y organizaciones nacionales e internacionales. En 2018 se creó en Medellín, la capital del departamento, el Plan de acción para la transformación regional (PATR), con el cual se busca integrar la participación de las comunidades veredales, cuyas principales solicitudes son la creación de vías, además del mejoramiento de las condiciones de las viviendas y los acueductos.

Uno de los avances logrados a partir de la firma del Plan de acción para la transformación regional es que estos seis municipios acogieron el Programa de desarrollo con enfoque territorial dentro de sus planes de desarrollo. Para la subregión se destinaron 5,15 billones de pesos, para mejorar la calidad de vida de los habitantes. Una de las preocupaciones en el bajo Cauca con relación a los Planes de desarrollo es el posible regreso de las fumigaciones a la hoja de coca para uso ilícito (*Verdad Abierta*, 2019).

Desde las actividades coordinadas por la Agencia de Renovación del Territorio (ART) se han estimado trescientos dieciséis proyectos para el mejoramiento de vías y educación. Además, desde lo departamental se han hecho esfuerzos de cooperación internacional y empresas públicas como EPM (Empresas Públicas de Medellín), y privadas como Mineros S. A., Corona y Argos, se han comprometido a participar en el mejoramiento de la región por medio de mecanismos como obras por impuestos u obras PDET (Agencia de Renovación del Territorio, 2020). Sin embargo, a pesar de la firma del Acuerdo de paz, en el bajo Cauca se observa el recrudecimiento de la violencia, por las disputas territoriales entre los grupos armados organizados y las Bacrim.

2.2.3 Violencia en contra de líderes

Según el Registro Único de Víctimas “el 22,0% de la población del Bajo Cauca, o sea 68.726 personas, se encuentran registradas como víctimas del conflicto armado en el Registro Único de Víctimas – RUV – de la UARIV a abril de 2017” (IPC, s. f.). Múltiples informes de prensa⁹ han mostrado que luego de la firma del Acuerdo de

9 *El Tiempo*. 2019. “La odisea de hacer política en medio del fuego cruzado en Antioquia”. Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/riesgo-en-el-bajo-cauca-antioqueno-para-candidatos-410822>

El Tiempo. 2019a. “Los últimos días de vida de la candidata Karina García Sierra”. Disponible en <https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/otras-ciudades/ultimos-dias-de-vida-de-la-candidata-karina-garcia-sierra-409916>

El Tiempo. 2018. “Asesinan a líder social y a una mujer en Tarazá, Antioquia”. Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asesinan-dos-personas-una-de-ellas-lider-social-en-taraza-antioquia-309596>

El Espectador. 2019. “Un nuevo líder social asesinado en Tarazá, en el bajo Cauca antioqueño”. Disponible en <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-nuevo-lider-social-asesinado-en-taraza-en-el-bajo-cauca-antioqueno-articulo-894772>

El Espectador. 2020. “Los hechos que rodean la desaparición de un líder comunal en el bajo Cauca”. Disponible en <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/los-hechos-que-rodean-la-desaparicion-de-un-lider-comunal-en-el-bajo-cauca-articulo-918463>

El Tiempo. 2020. “Ola de homicidios recrudecen la violencia en el bajo Cauca antioqueño”. Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ola-de-homicidios-recrudecen-la-violencia-en-el-bajo-cauca-antioqueno-453106>

InSight Crime. 2020. “Radiografía de la violencia contra líderes sociales en Colombia”. Disponible en <https://es.insight-crime.org/noticias/analisis/violencia-lideres-sociales-colombia/>

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2012. *Regiones en conflicto: comprender para transformar. Bajo Cauca, Huila, Meta, Montes de María y Nariño*. Colección Cuadernos INDH 2011. PNUD. Bogotá.

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2015. *Antioquia: retos y prioridades del departamento 2016-2019*. PNUD. s. l.

Agencia de Renovación del Territorio (ART). 2020. “Antioquia se prepara para construir hoja de ruta para la implementación de los PDET”. Disponible en https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/antioquia_se_prepara_para_construir_hoja_de_ruta_para_la_implementacin_de_los_pdet

paz las condiciones para la población de la subregión antioqueña no mejoraron. Las Bacrim y los GAO siguen haciendo presencia en todo el territorio y se disputan su control, así como las zonas de plantación de la hoja de coca y la producción de cocaína. La presencia de los llamados grupos armados organizados y de las disidencias de las Farc, el ELN, así como la guerra entre los Rastrojos, los Caparrapos y el Clan del Golfo por el control del territorio, sigue afectando a la población y es uno de los principales determinantes para la configuración de las formas de vida de los seis municipios que conforman la subregión. A estos actores le sumamos que “algunas bandas delincuenciales del valle de Aburrá, como los ‘Triana’, están expandiendo sus acciones criminales hacia esa subregión. La intención es clara: mover droga hacia el norte y sacarla por Urabá” (*El Tiempo*, 2019). Estos grupos mantienen pues una guerra por el control del territorio, los cultivos ilícitos de coca, la explotación del oro y el tráfico de drogas. En medio de estas largas confrontaciones queda la comunidad, que se ha visto muy afectada tanto por los hechos violentos diarios, como por la ausencia del Estado y sus instituciones.

Muchos casos de líderes comunales y campesinos asesinados tienen relación con el Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito (véase el mapa 4). Algunos de los casos más conocidos en el ámbito nacional son los de Miguel Pérez, líder cocalero en Tarazá, acogido a dicho Programa y militante de la Unión Patriótica (UP); Javier Enrique Tapias, miembro de la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca (Asocbac) y de la Junta de Acción Comunal de la vereda Ocabajo perteneciente al municipio de Tarazá; y Walter Enrique Rodríguez, presidente de la Junta de Acción Comunal de San Miguel,

también miembro de Asocbac (*El Espectador*, 2019b). Según *El Espectador* (2020), en 2018 en el bajo Cauca fueron asesinados catorce líderes, ocho de los cuales participaban del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. En 2019, de once líderes asesinados, siete pertenecían a ese programa. Los ataques contra líderes sociales no cesaron, incluso durante las restricciones impuestas por el coronavirus. John Fredy Restrepo, líder social perteneciente a la Asociación de Campesinos del Bajo Cauca, desapareció el 29 de abril en Tarazá y a la fecha se desconoce su paradero (*El Espectador*, 2020; Agencia Prensa Rural, 2020).

Hasta julio de 2020 se habían registrado treinta y nueve asesinatos de líderes sociales en la subregión; cabe destacar al respecto que 36% de estos asesinatos están relacionados con líderes y miembros de comunidades y asociaciones vinculadas al Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. La violencia contra líderes campesinos que se acogieron a ese Programa, como los miembros de Asocbac, está muy relacionada con dinámicas de extorsión por parte de grupos criminales. Según *El Espectador* (2020), estos grupos amenazan a líderes sociales, exigiendo el pago de 10% del subsidio de dos millones de pesos que reciben por ser parte del Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito. Los grupos armados organizados les ordenan a los líderes comunales recoger estos porcentajes en las veredas y asesinan a quienes se rehúsan.

Cabe destacar que además de la fuerte relación entre estos asesinatos y el Programa nacional integral de sustitución de cultivos de uso ilícito, varios de estos líderes son miembros de asociaciones campesinas o indígenas y mesas de trabajo comunitarias. Entre estas podemos destacar a los miembros de la comunidad indígena Aheramigua (Asociación de Hermandades Agroecológicas y Mineros de Guamocó) y las asociaciones campesinas Asocbac y Anzorc (Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina) (*Verdad Abierta*, 2019). En próximas entregas se discutirá en más detalle la relación entre esta violencia y las formas de orden político y social que se han constituido en los municipios del bajo Cauca. Por ahora es importante resaltar que en los municipios de la región en donde se observa mayor número de asesinatos a líderes sociales, se observa también un alto nivel de

Verdad Abierta. 2019. “Las necesidades apremiantes de la Antioquia del posconflicto”. Disponible en <https://verdadabierta.com/las-necesidades-apremiantes-de-la-antioquia-del-posconflicto/>

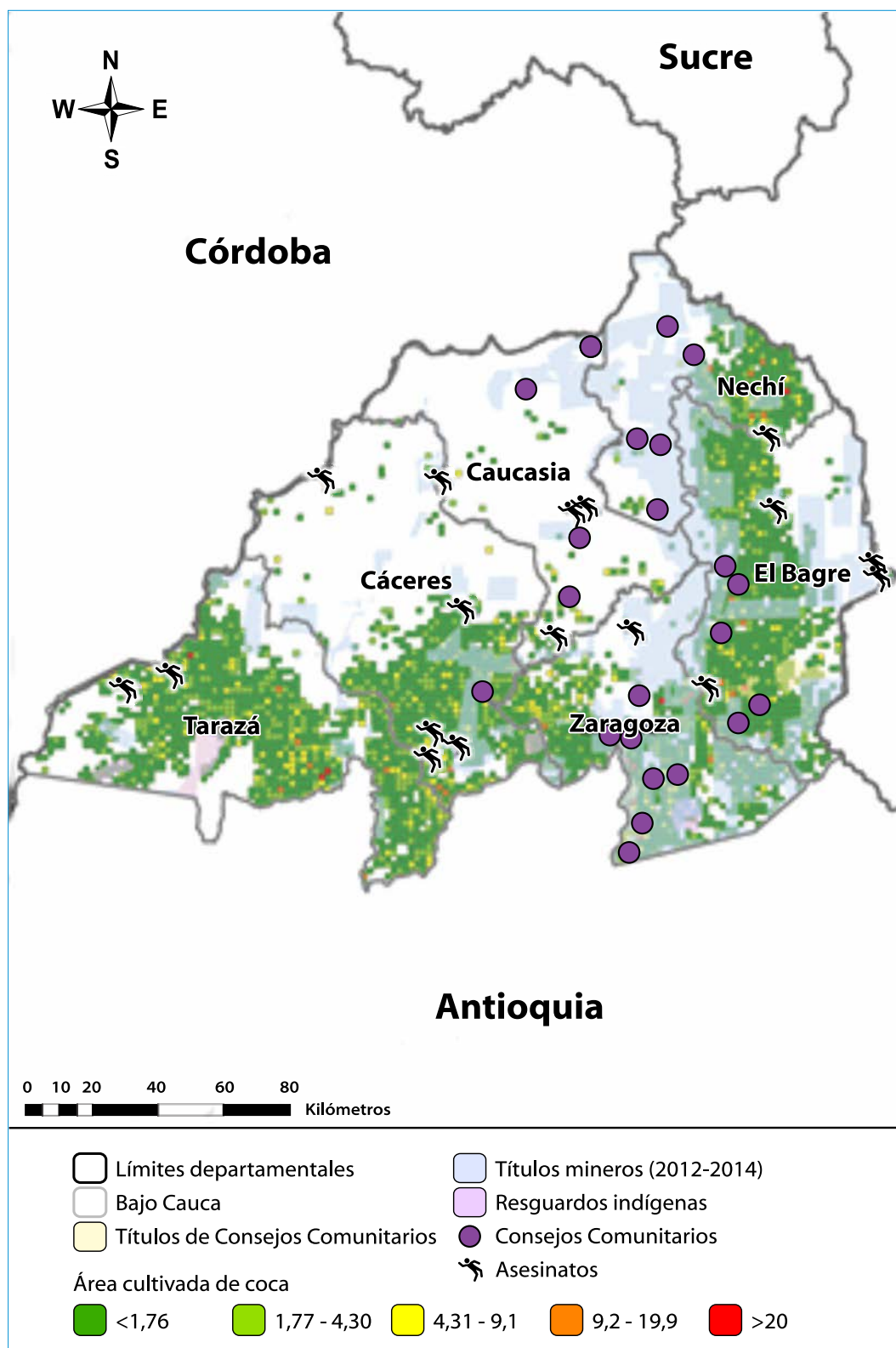
Verdad Abierta. 2017. “¿Qué hay detrás del asesinato de un líder cocalero en Tarazá?”. Disponible en <https://verdadabierta.com/que-hay-detras-del-asesinato-de-un-lider-cocalero-en-taraza/>

Verdad Abierta. 2019. “En Antioquia, comunidades esperan las inversiones del posconflicto”. Disponible en <https://verdadabierta.com/en-antioquia-comunidades-esperan-las-inversiones-del-posconflicto/>

Mapa 4

Asesinatos a líderes y lideresas sociales 2017 y 2018 -

Consejos comunitarios y tierras indígenas 2016 en el bajo Cauca



Fuente: Heinrich Böll Stiftung, Indepaz, 2018.

riesgo a la integridad de los procesos electorales. Tarazá y el El Bagre, por ejemplo, fueron catalogados en 2019 como unos de los municipios del país con mayor riesgo electoral (*El Tiempo*, 2019a).

2.3 EL MUNICIPIO DE TUMACO

Tumaco es uno de los sesenta y cuatro municipios que componen el departamento de Nariño, departamento ubicado al suroccidente de Colombia y que limita al norte con el Cauca, al oriente con Putumayo, al sur con Ecuador y al occidente con el océano Pacífico (véase el mapa 5).

Al tener su cabecera municipal sobre dos islas, Tumaco y El Morro, es, después de Buenaventura, el segundo puerto más importante sobre la costa Pacífica colombiana. Su población es de aproximadamente 212.000 habitantes (Rimisp, 2017), predominando la población afrocolombiana (88,8%) e indígena (5,1%), lo que implica formas especiales en su organización territorial. El municipio está subdividido en setenta y cuatro barrios, dos corregimientos y cinco comunas. En su zona rural existe un ordenamiento territorial conformado por dieciséis Consejos Comunitarios y quince resguardos indígenas. Los dieciséis Consejos Comunitarios tienen un área total de 205.382 hectáreas, que albergan 8.102 familias, y están confederados en la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (Recompas). Los quince resguardos indígenas, con sus respectivos territorios organizados y delimitados, están conformados por dos grupos étnicos, awá y eparara, con un total de 1.414 familias (Rimisp, 2017). La población de la comunidad awá está organizada en la Unidad Indígena del Pueblo Awá (Unipa) y la de la etnia eparara siapidara en la conformación del resguardo San Agustín-La Floresta.

A pesar de ser el segundo puerto de la región Pacífica, la situación de pobreza es preocupante: 48,74% de quienes habitan en la zona urbana vive con necesidades básicas insatisfechas (NBI) y 16,73% en condiciones de miseria. El índice de pobreza multidimensional (IPM) es de 84,5% para toda la población del municipio, con 74% en la parte urbana y 9,3%, en la zona rural (Ortiz, 2018).

Como en otros lugares del Pacífico, la configuración del municipio está ligada a los ciclos extractivos que se han dado en la región y a la violencia intensa que surgió desde la década de 1990 debido a la presencia de importantes actores como frentes de las Farc y del ELN, el paramilitarismo con el bloque Libertadores Sur y, actualmente, de estructuras relacionadas con la desmovilización paramilitar y de las Farc. En consecuencia, además de las profundas situaciones de desigualdad y pobreza, Tumaco debe afrontar situaciones de intensa violencia relacionadas con las dinámicas del conflicto armado, que se expresa diferencialmente en su contexto urbano y rural. Actualmente, el municipio tiene una de las tasas de homicidios más alta del país, con setenta muertes por cada cien mil habitantes (Quintero, 2019).

2.3.1 Estructura socioeconómica

La economía de Tumaco se destaca por tener un uso del suelo distribuido de la siguiente manera: 52% es agroforestal, 24% forestal, 22,8% de conservación y 1,2% en cuerpos de agua. Sus características biodiversas han hecho del municipio una zona geoestratégica para el desarrollo de distintas actividades económicas tanto legales como ilegales (Rimisp, 2017).

Los principales renglones económicos se concentran en actividades agropecuarias, forestales, pesqueras, portuaria-industriales, comerciales y turísticas. La posición geoestratégica de Tumaco permite que se den las condiciones necesarias para el cultivo de coca, una producción a gran escala que determina varias de las relaciones económicas locales. Actualmente, según la Oficina de las Naciones Unidas contra las Drogas y el Delito (Unodc, 2019), este municipio ocupa el primer lugar en la producción de hoja de coca, con 23.148 hectáreas sembradas, correspondientes al 16% del total sembrado en el país. Esta actividad integra a buena parte de la población, no solo al cultivo, sino a las demás actividades de la cadena de transformación de la coca en cocaína y a su comercialización: cristalizaderos, transporte e intermediación para la comercialización.

El del cultivo de coca es uno de los tantos ciclos extractivos que permiten comprender la historia de la subregión. En ese sentido, el desarrollo del conflicto en este muni-

Mapa 5
Tumaco (Nariño)



cipio se remite también a los periodos de las bonanzas maderera, palmera y cocalera. La explotación intensiva de madera aserrada que tuvo lugar desde mediados del siglo veinte hasta 1980, hizo de Tumaco el principal centro de exportación de madera, pero propició también grandes planicies que a partir de la década de los noventa permitieron el surgimiento del monocultivo de la palma aceitera africana y el cultivo de coca. Actualmente, la explotación de palma sigue siendo una de las principales actividades económicas legales del municipio y constituye una bonanza agroindustrial cuyos beneficios se distribuyen en otras regiones del país. En cuanto a la bonanza cocalera, empezó a finales de la década del noventa, a consecuencia de las fumigaciones y operaciones militares en los entonces principales departamentos productores: Putumayo y Caquetá. Sin embargo, la relación de la región con dinámicas asociadas al narcotráfico se remonta a la década de los ochenta, con la llegada y el establecimiento de haciendas para el entretenimiento y lavado de activos por parte de testaferros del llamado cartel de Cali.

Sobre este último punto, la Fundación Ideas para la Paz (2014) explica que a partir de 1998 Tumaco se convirtió “en el principal lugar del país con mayor actividad vinculada al narcotráfico”. De acuerdo con este informe, la consolidación de la presencia del cartel de Cali se dio entre 1980 y 1994 por medio de testaferros de Jairo Aparicio, José Santacruz Londoño y Elmer *Pacho* Herrera, quienes llegaron para comprar terrenos que utilizarían como centros de acopio de cocaína. Fue también durante este periodo cuando se empezó a hablar de y a utilizar los corredores estratégicos¹⁰ para el transporte de insumos químicos, armamentos y cocaína. No obstante, fue a finales de los años noventa cuando los cultivos de coca llegaron a la región.

Posteriormente, a finales de la década de los noventa, las Autodefensas Unidas de Colombia llegaron al muni-

cipio a raíz la petición que les hicieran algunos palmicultores, comerciantes, terratenientes e industriales, para que les “ayudaran” a contener los crímenes de las Farc: secuestros y extorsiones, sobre todo. Petición unida a las intenciones de Carlos Castaño de expandir el paramilitarismo al sur del país, para obtener así el valor estratégico de Tumaco para el tráfico de drogas. Esta situación implicó la llegada del bloque Libertadores del Sur, adscrito al bloque Central Bolívar de las AUC, con cuya llegada se iniciaron los asesinatos selectivos de líderes sociales y políticos, unido a una estrategia de establecer control sobre las vías terrestres con salida al mar (Rasmussen y Valencia, 2018).

El traslado de los cultivos de coca desde el Putumayo y el Caquetá después de las marchas cocaleras de 1996 y del inicio del plan Colombia y su estrategia de fumigaciones durante el gobierno del presidente Andrés Pastrana (1998-2002), propició paralelamente un ciclo de migración ligado a la economía de la producción de cocaína, que se dirigió en un primer momento a los corregimientos de Llorente y La Guayacana, ubicados cerca a la vía Pasto-Tumaco y al oleoducto Trasandino. La migración de los cultivos y de población, a la que los habitantes de este corregimiento llamaron como “los llegados” o los “llegaderos”, tuvo una mayor concentración en Llorente, a tal grado que entre 1997 y 2001 se consolidó como el principal centro de venta y compra de base de coca en el país. Actualmente, Nariño es el departamento que más cultivos concentra, con 41.903 hectáreas en 2018 (Unodc, 2019), distribuidas entre los municipios de Tumaco y El Charco. Esta concentración obedece, según el gobierno nacional, a una densificación del cultivo, que facilita la intermediación, lo cual agrava la situación debido a los cambios que se han dado en los últimos dos años en lo que se refiere a las políticas de sustitución (Unodc, 2018).

Los enfrentamientos entre cultivadores y la Policía Antinarcóticos han sido muy visibles recientemente, ya que desde marzo de 2017 se han venido desarrollando procesos de erradicación forzada de los sembrados de coca. Los campesinos del departamento, por medio de sus organizaciones como la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Coca, Amapola y Marihuana (Coccam), así como con la Asociación de Juntas de Acción Co-

¹⁰ Algunos de estos corredores estratégicos bajan por el río Rosario hasta la carretera principal, la vía Pasto-Tumaco, y de allí hacia el bajo Mira y Frontera hacia el mar, a través de puntos conocidos como Candelilla la Mar y San Jacinto. Otros corredores vienen desde Roberto Payán y atraviesan el Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera para salir hacia el Ecuador.

munal de los Ríos Mira, Nulpe y Mataje (Asominuma) y la Asociación Porvenir Campesino (Asoporca), se han manifestado en contra de la erradicación forzada y las fumigaciones con glifosato, que han perjudicado su calidad de vida y la del suelo. Adicionalmente, los planes gubernamentales para la transición hacia otros cultivos han fallado y no se les han brindado ni las herramientas ni alternativas eficientes para dejar el de coca. La actividad del sembrado de coca ha llevado también a varios problemas ambientales, siendo uno de los más evidentes la contaminación de los cinco ríos que atraviesan el municipio: Iscuandé, Patía, Rosario, Mejicano y Mira, que en los últimos años han presentado altos niveles de contaminación, encontrándose en ellos residuos de queroseno, ácido sulfúrico, amoníaco, ácido clorhídrico, acetona y permanganato de potasio (Rimisp, 2017).

En cuanto a la relación entre conflicto y proyectos agroindustriales, el Observatorio de Procesos y Desarme, Desmovilización y Reintegración de la Universidad Nacional de Colombia, en su informe sobre la caracterización del departamento de Nariño (2011) y citando a la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), señala que el carácter económico de las plantaciones agroindustriales de la costa Pacífica y del piedemonte de la cordillera Occidental, en donde se cultivan grandes plantaciones de caucho, palma aceitera y coca, ha generado situaciones de conflicto en las comunidades que habitan Tumaco. Este municipio, como el norte del departamento del Cauca y el bajo Cauca antioqueño, expuestos anteriormente, es una región de importancia geoestratégica y, por ende, disputada por actores armados interesados en el control territorial para acceder a rentas legales e ilegales.

2.3.2 Dinámicas del posconflicto

La Fundación Ideas para la Paz (2014) agrupa los antecedentes del conflicto armado en Tumaco en tres momentos: el primero, después de 1999, cuando los cultivos de hoja de coca se trasladaron de los departamentos de Meta, Caquetá y Putumayo hacia Nariño a consecuencia de la puesta en marcha de los planes Colombia y Patriota. El segundo, cuando las autodefensas entraron al municipio a partir del año 2000 y empezó una serie de confrontaciones entre este grupo armado y la guerrilla

de las Farc por el control de rutas del narcotráfico. El tercero, cuando en 2009 las Farc implantaron el Plan Renacer, con el que buscaban recuperar los espacios dominados por los Rastrojos en la costa Pacífica y las Águilas Negras en el norte de Nariño. En su implementación, las Farc incrementaron el número de minas antipersonales sembradas, además de la presencia de francotiradores y los hostigamientos, todo lo cual les permitió salir hasta zonas medias de los ríos del departamento. Finalmente, podemos plantear que después de la desmovilización de las Farc a finales de 2016, la violencia se ha recrudecido y nuevamente diversos grupos armados ilegales se disputan el control territorial.

Aunque es evidente la disminución de los casos de violencia perpetrados por las Farc, en el municipio aún hacen presencia las disidencias de este grupo, provenientes de la columna móvil Daniel Aldana y del frente 29, que han dado origen a varios grupos como las Guerrillas Unidas del Sur, Resistencia Campesina, Guerrillas Unidas del Pacífico y el frente Oliver Sinisterra (Fundación Ideas para la Paz, 2014), además de bandas criminales como los Rastrojos y una serie de estructuras criminales que se han reorganizado como los Milicianos o los Nichepandas, de las que muchos de sus integrantes quedaron por fuera del Acuerdo de paz, volvieron a delinquir y a iniciar una guerra por el control territorial, para la exportación e importación de la pasta de coca y para el control de las zonas de cultivo. Hasta diciembre de 2019, el Informe del Cuerpo Élite Policía Nacional de homicidios contra líderes sociales y defensores de derechos humanos 2016-2019, basándose en datos de la Consejería Presidencial para los Derechos Humanos y Asuntos Internacionales (última actualización 14 de enero de 2020), registró trece asesinatos de líderes sociales en Tumaco, mientras el informe de Pacifista registró, desde la firma del Acuerdo de paz en noviembre de 2016 hasta noviembre de 2017, cincuenta y siete asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, solo en este municipio.

El balance no es alentador, siendo uno de los principales problemas el desconocimiento por parte del Estado de los asesinatos ocurridos y los constantes atentados y amenazas contra los líderes sociales. Mientras que el Estado minimiza los datos, los medios independientes

resaltan la sistematicidad de los casos. Así, por ejemplo, en diciembre de 2019 la lideresa social Lucy Villarreal fue asesinada mientras terminaba un taller para niños, lo que muestra la crudeza de los escenarios violentos en el municipio, que son constantes (*El Heraldo*, 2019).

2.3.3 Violencia contra líderes¹¹

El 29 de agosto de 2016, cuando empezó el cese bilateral del fuego entre el gobierno nacional y las Farc, fueron asesinados en Tumaco cinco líderes sociales, entre ellos Alberto y Luciano Pascal, miembros de la organización Unidad Indígena del Pueblo Awá. Días antes también fue asesinado Camilo Roberto Taicus Biscbi-cus, perteneciente a esta comunidad. Durante agosto de 2016, en el resguardo indígena Pianupi Píalarigala, ubicado en el corregimiento de Llorente, fueron asesinados tres indígenas awás más. El pueblo awá es, quizás, una de las comunidades indígenas de Tumaco más afectadas por las acciones armadas de la fuerza pública y los grupos ilegales. Entre las acciones se pueden señalar violencia, asesinatos y amenazas, detenciones irregulares, desapariciones y el asesinato de autoridades tradicionales.

A principios de 2016, en enero, fue asesinado Johan Alexis Vargas, integrante del Consejo Comunitario Rescate las Varas y de Marcha Patriótica. Sobre los autores de esta muerte tampoco hay información. En mayo del mismo año, Franklin Quiñones, miembro también del Consejo Comunitario Rescate las Varas y militante de Marcha Patriótica, sufrió un atentado, cometido por presuntos miembros de las Autodefensas Gaitanistas de Colombia. En agosto de 2015, Genaro García, representante legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, fue asesinado por las Farc. En un principio, el bloque Occidental de este grupo negó haber participado en este hecho. Sin embargo, en 2016, en una ceremonia realizada en el Centro de la Memoria en Tumaco, y por medio de la Comisión Negociadora de Paz que se encontraba en La Habana, reconocieron su responsabilidad sobre el asesinato de este líder y pidieron perdón por ello.

Estos casos de homicidios corroboran los informes que describen a Nariño, y a Tumaco, como los lugares donde los líderes sociales y los defensores de derechos humanos están más expuestos a amenazas y acciones violentas por parte de grupos armados. Una situación preocupante por la imposibilidad de identificar a los autores de estos hechos. Aunque en algunos casos las Farc han reconocido sus actos, la continuidad de la violencia se relaciona con grupos armados ilegales y disidencias, así como con el ELN y las Autodefensas Gaitanistas.

El recrudecimiento de la violencia y el asesinato de los líderes es preocupante porque muestra los límites de la implementación del Acuerdo de paz, en especial en el punto de participación política, la transición a la vida política de las Farc y la posibilidad de garantizar la seguridad a las poblaciones de la región. Los líderes afrodescendientes e indígenas manifiestan haber advertido al Estado de estas amenazas y del aumento de la violencia que vendría con la desmovilización de las Farc. En el caso de la comunidad indígena awá, el Estado tiene mayores responsabilidades, pues en auto 004 de 2009, ratificado en 2011 en el auto 174, la Corte Constitucional lo obliga a su protección. Luego de los hechos ocurridos en 2009,

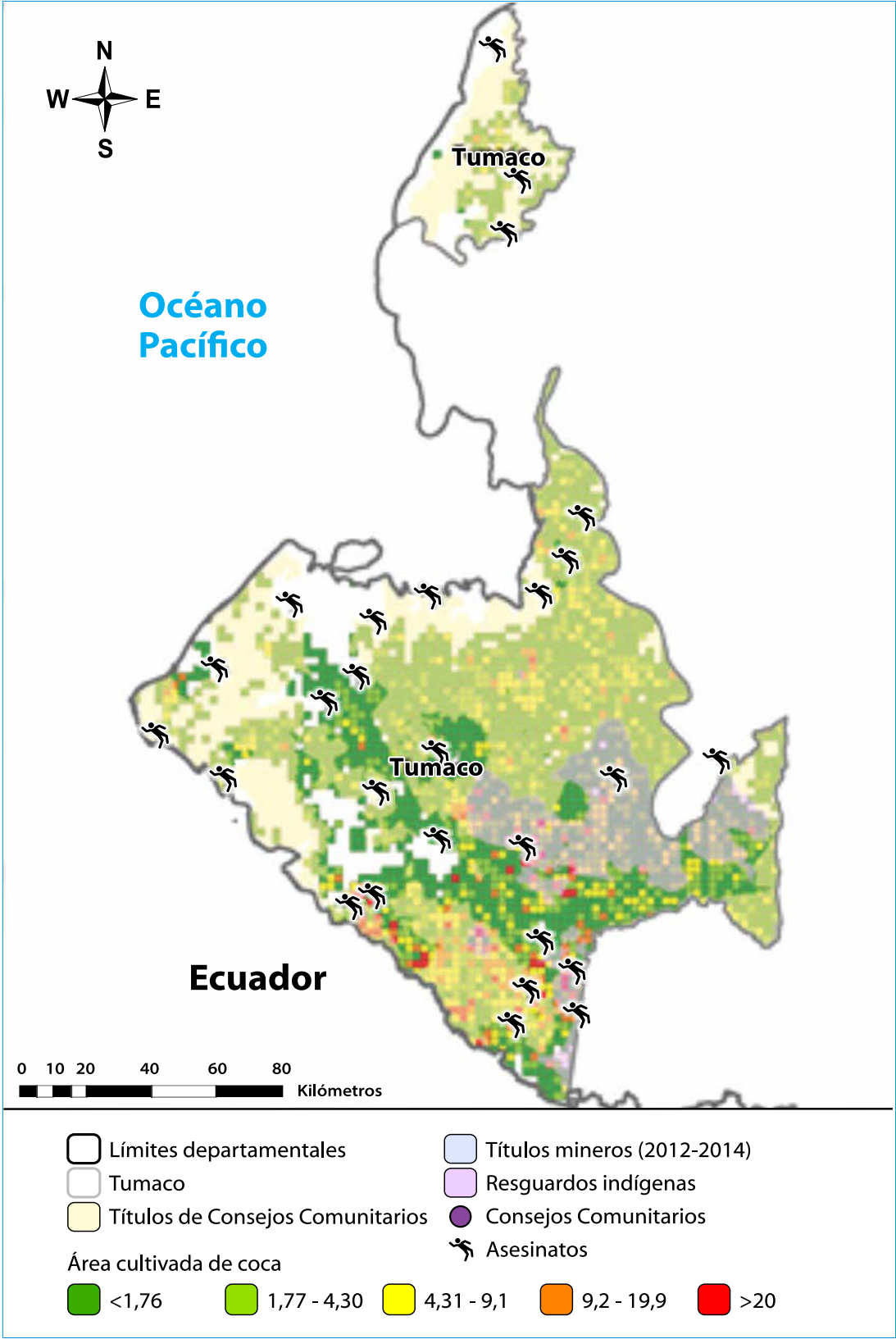
[...] tras las masacres de Tortugaña-Telembí en Barba-coas, 4 de febrero 2009, en donde mataron al menos 17 indígenas y en el resguardo Gran Rosario (Tumaco) el 26 de agosto de ese mismo año. Allí acribillaron a 12 personas de las cuales 6 eran menores de edad,

el auto 004 se emitió como una manera para exigir al Estado la protección de estas poblaciones.

De acuerdo con una columna de la geógrafa Tatiana Acevedo publicada en el periódico *El Espectador* (*El Espectador*, 2018a), “guerrillas, paras y narcos organizados se han turnado en la misión de acabar con los Consejos Comunitarios y la titulación colectiva de tierras”. Las estadísticas revelan que hasta 2017 la mayoría de las víctimas, sesenta y nueve, eran líderes comunitarios asesinados. Aunque la opinión de Acevedo se basa en las víctimas registradas, los miembros de estas comunidades tienen otra lectura, de acuerdo con la cual establecen asociaciones entre la violencia y los mercados ilegales (en particular el narcotráfico), como lo muestra el siguiente testimonio tomado del *Diario del Sur* (2016):

¹¹ Véase el mapa 6.

Mapa 6
Asesinatos a líderes y lideresas sociales 2017 y 2018 -
Consejos comunitarios y tierras indígenas 2016 en Tumaco



Fuente: Heinrich Böll Stiftung, Indepaz, 2018.

[...] Los grupos armados han sido más implacables y claro quieren quitarlos del camino porque sus territorios son los mismos por donde los narcotraficantes movilizan las drogas, los insumos y las disponen para los cultivos de coca. Esa zona es geopolíticamente estratégica para los 'narcos', porque en el piedemonte cultivan,

producen la cocaína y por esteros y el mar transportan su negocio hacia Centroamérica y los Estados Unidos. Territorio del que se han apropiado en gran parte y del cual quieren despojar a los awá a punta de plomo porque no hay un Estado o una Fuerza Pública que los proteja.

3

REFLEXIONES FINALES

En este primer documento de análisis queda claro que la presencia de economías ilegales es un factor importante asociado a las dinámicas de violencia contra líderes sociales en el norte del departamento del Cauca, el bajo Cauca antioqueño y el municipio de Tumaco. Al investigar los casos encontramos que su ubicación y geografía ha sido aprovechada por actores armados ilegales para controlar territorios y economías legales e ilegales. En estas tres zonas la minería de enclave extractivo ilegal, el cultivo de coca y actividades relacionadas con el procesamiento de cocaína, están estrechamente relacionadas con el recrudecimiento de la violencia. Situación que evidencia cómo, en los últimos años, el reacomodamiento de actores armados y las luchas por el control territorial se relacionan con la articulación transnacional a las actividades del narcotráfico, y cómo estas subregiones se convierten en *clusters* de economías ilegales, que permiten la conexión de las economías ilegales con las dinámicas transnacionales, donde la conexión entre producción e intermediación (y geográficamente zonas montañosas y salidas al mar) tienen un rol preponderante para entender dónde se localiza la violencia.

Es claro asimismo que esta relación entre actividades extractivas y conflicto armado nos invita a visibilizar la consecución de bienes económicos sin perder de vista la problematización política. Para Macartan Humphreys (2005), por ejemplo, existen por lo menos seis mecanismos que pueden explicar la relación entre los recursos naturales y el comienzo de una guerra de larga duración. Estos mecanismos incluyen la debilidad estatal, la viabilidad (los recursos naturales podrían financiar guerras iniciadas por otros motivos), las redes (el grado en que esos recursos afectan la cotidianidad de las personas y cómo esto define la posición de estos ante los conflictos), el reclamo (la dependencia de los recursos naturales, de

hecho, podría estar asociada con quejas en lugar de la codicia), y la codicia de algún agente externo (Valencia y Silva, 2018). Por ello, es muy importante trascender la idea de que solo la presencia de estas actividades explica la ocurrencia e intensidad de la violencia. Es necesario explorar cómo estos mercados ilegales están regulados y de qué manera los actores armados participan de la construcción de órdenes sociales locales en estas periferias rurales. En pocas palabras, es necesario explorar cómo se da la gobernanza criminal en estas zonas y cómo esta enfrenta y, en ocasiones, se complementa con otras visiones sobre el territorio: la gobernanza comunitaria y la estatal.

Como señalan otros autores (Barnes y Albarracín, 2020), la gobernanza criminal tiene, por lo menos, tres dimensiones: la gobernanza criminal de comunidades, de mercados ilegales y de grupos criminales. En el primer caso, la gobernanza criminal se refiere al establecimiento de formas de orden social mediante instituciones informales (por ejemplo, normas de comportamiento) y la provisión de bienes públicos (seguridad, resolución de conflictos) a comunidades enteras por parte de grupos criminales, así estas actividades no tengan relación directa con mercados ilegales. La gobernanza de mercados ilegales se refiere a generar predictibilidad en mercados que no pueden ser regulados abiertamente por la acción estatal mediante la generación de reglas de juego sobre la división de rutas, segmentos de mercado, de ganancias, formas de seguridad colectiva y resolución de disputas, entre otros. Por último, la gobernanza criminal se refiere a las formas en que un grupo se organiza internamente (Barnes y Albarracín, 2020).

Estas tres caras de la gobernanza criminal tienen repercusiones sobre la vida de las personas y la violencia social

en zonas periféricas, como en las tres regiones estudiadas. Por ejemplo, la violencia contra líderes sociales puede ocurrir para mantener órdenes sociales autoritarios locales (gobernanza criminal de las comunidades) o en respuesta a disrupciones en mercados criminales (gobernanza de mercados criminales). Es necesario explorar cómo ciertas formas de gobernanza criminal involucran el uso del asesinato de líderes sociales o el uso de otras formas de violencia y cuándo el control es tan hegemó-

nico que no se necesita usar la violencia física. Adicionalmente, debemos explorar también cómo otras élites locales están involucradas en la construcción de órdenes sociales locales autoritarios, en el uso de la violencia contra los movimientos sociales y, de esta manera, se benefician políticamente de estas formas de poder local. En los próximos documentos de esta serie se explorarán estas preguntas en más detalle.

BIBLIOGRAFÍA

- Acin.** 2020. "Boletín de Derechos Humanos: nueva agresión de la fuerza pública contra comunidad liberadora en La Emperatriz". Disponible en <https://nasaacin.org/nueva-agresion-de-la-fuerza-publica-contra-comunidad-liberadora-en-la-emperatriz/>
- Albarracín, J. y N. Barnes.** 2020. "Criminal Violence in Latin America". *Latin American Research Review*. 55 (2), 397-406. DOI: <http://doi.org/10.25222/larr.975>
- Agencia de Renovación del Territorio. s. f.** "Municipios PDET Subregiones". Recuperado de https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/municipios_pdet_subregiones
- , 2020. "Más de \$22.472 millones serán invertidos en municipios PDET de Antioquia". Disponible en [renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/ms_de_22472_millones_sern_invertidos_en_municipios_pdet_de_antioquia](https://www.renovacionterritorio.gov.co/Publicaciones/ms_de_22472_millones_sern_invertidos_en_municipios_pdet_de_antioquia)
- Agencia Prensa Rural.** 2020. "Desaparecido líder campesino del bajo Cauca antioqueño. En plena cuarentena siguen las violaciones a los derechos humanos". Disponible en <https://www.prensarural.org/spip/spip.php?article25385>
- Albarracín, J., J. P. Milanese e I. Valencia.** 2020. "Electoral Competition, Local Political Orders, and Criminal Violence: Analysis of the Assassination of Social and Civic Leaders in Colombia". Paper presented at First Meeting of the Latin American Peace Science Society. Medellín, 17-18 de enero.
- Aprile-Gniset, J.** 1994. *Los pueblos negros caucanos y la fundación de Puerto Tejada*. Gobernación del Valle del Cauca. Cali.
- Ararat, L., E. Mina, A. Rojas, A. M. Solarte, G. Vane-gas, L. A. Vargas y A. Vega.** 2013. *La Toma. Historia de territorio, resistencia y autonomía en la cuenca del alto Cauca*. Consejo Comunitario Afrodescendiente de La Toma, Suárez, Cauca-Observatorio de Territorios Étnicos, Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.
- Arjona, A.** 2008. "Grupos armados, comunidades y órdenes locales: interacciones complejas". En F. González (ed.). *Hacia la reconstrucción del país: desarrollo, política y territorio en regiones afectadas por el conflicto armado*. Odecofi-Colciencias-Cinep. Bogotá.
- Barnes, N. y J. Albarracín.** 2020. "Criminal Governance in the Time of COVID-19". <https://urbanviolence.org/criminal-governance-in-the-time-of-covid-19/>
- Bautista, S.** 2017. "Contribuciones a la fundamentación conceptual de paz territorial". *Ciudad Paz-andó*. 10 (1), 100-110.
- Caicedo Fernández, A.** 2017. "Vida campesina y modelo de desarrollo: configuraciones de despojo/privilegio en el Norte del Cauca". *Revista Colombiana de Antropología*. 53 (1), 59-89.
- Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia.** 2019. *Perfiles socioeconómicos de las subregiones de Antioquia*. Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia. Medellín.
- Cámara de Comercio del Cauca.** 2019. *Entorno socio-económico del departamento del Cauca 2019*.
- Caro Galvis, C.** 2014. "Minería en el norte del Cauca indígena. Prácticas territoriales y transformaciones socioespaciales en los resguardos indígenas nasa del municipio de Santander de Quilichao, Cauca, Colombia". En B. A. U. Göbel (ed.). *Extractivismo minero en Colombia y América Latina*. Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas. Bogotá.

Carvajal, I. M. e I. Santos. 2014. *El conflicto armado en el sur del Valle y el norte del Cauca y su impacto humanitario*. Fundación Ideas para la Paz (FIP). Bogotá. Recuperado de <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1004>

Colombia Informa. 2020. "Cauca: el asesinato de líderes sociales en medio de la pandemia". Disponible en <https://www.colombiainforma.info/cauca-el-asesinato-de-lideres-sociales-en-medio-de-la-pandemia/>

Cric. 2019. "Pronunciamiento: Panfleto de las Águilas Negras en contra de la dirigencia del CRIC". Disponible en <https://www.cric-colombia.org/portal/pronunciamiento-panfleto-de-las-aguilas-negras-en-contra-de-la-dirigencia-del-cric/>

Coljuristas. 2018. "¿Cuáles son los patrones? Asesinatos de líderes sociales en el post acuerdo". 15 de febrero. Disponible en https://www.coljuristas.org/centro_de_documentacion/documento.php?id_doc=636

Dane. 2018. "Pobreza multidimensional por departamentos 2018". Disponible en https://www.dane.gov.co/files/investigaciones/condiciones_vida/pobreza/2018/presentacion_pobreza_multidimensional_18_departamento.pdf

Defensoría del Pueblo. 2018. "Situación de los derechos humanos en el departamento de Cauca. Informe ejecutivo". Disponible en <https://www.defensoria.gov.co/public/pdf/Informe-ejecutivo%20vicedef.pdf>

Dinámicas del conflicto armado en Tumaco y su impacto humanitario. 2014. Unidad de análisis siguiendo el conflicto. Boletín No. 69. Área de Dinámicas del Conflicto y Negociaciones de Paz.

DNP. 2018. Índice de ciudades modernas. Disponible en https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Vivienda%20Agua%20y%20Desarrollo%20Urbano/SMART%20CI-TIES/2018/1_Indice%20Ciudades%20Modernos_ACORCHUELO.pdf

Duarte, C. 2013. *Análisis de la posesión territorial y situaciones de tensión interétnica e intercultural en el departamento del Cauca*. Pontificia Universidad Javeriana Cali-Centro de Estudios Interculturales-Incoder. Cali.

Fundación Ideas Para la Paz. 2011. *Plan de consolidación en el bajo Cauca*. Disponible en www.ideaspaz.org/publicaciones

-----, 2013. *Dinámicas del conflicto armado en el sur del Valle y norte del Cauca y su impacto humanitario*. Disponible en <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/53b5910826062.pdf>

-----, 2014. *Informe de gestión 2014*. Fundación Ideas para la Paz. Bogotá.

Fundación Tierra y Paz. 2019. "Escalonamiento del conflicto armado en el norte del Cauca". Disponible en <https://www.fundaciontierradepaz.org/sites/default/files/Reflexiones%20TDP%20acerca%20del%20contexto%20actual%20del%20%20Norte%20del%20Cauca.pdf>

García, J. 2018. *Re-configuraciones territoriales emergentes: hacia la consolidación de regiones étnicas. Estudio de caso bajo cauca antioqueño, Colombia*. Universidad Nacional de Colombia (sede Medellín). Medellín.

Grupo Semillas. 2011. Corporación Grupo Semillas. Disponible en <http://semillas.org.co/es/publicaciones/finc-tradicional-econativa>

Guzmán, A. y A. Rodríguez. 2014. "Reconfiguración de los órdenes locales y conflicto armado: el caso de tres municipios del Norte del Cauca (1990-2010)". *Sociedad y Economía*. 26. 155-184.

Heinrich Böll Stiftung (ed.) 2018. "Informe especial de Derechos Humanos. Situación de lideresas y líderes sociales, de defensoras y defensores de derechos humanos y de excombatientes de las Farc-EP y sus familiares". *Ideas Verdes*. 8. Junio. Bogotá.

Human Rights Watch. 2018. "Violencia reciclada. Abusos por grupos disidentes de las Farc en Tumaco, en la costa pacífica de Colombia". 13 de diciembre. Disponible en <https://www.hrw.org/es/report/2018/12/13/violencia-reciclada/abusos-por-grupos-disidentes-de-las-farc-en-tumaco-en-la-costa>

Humphreys, Macartan. 2015. "Natural Resources, Conflict, and Conflict Resolution: Uncovering the Mechanisms". *Journal of Conflict Resolution*. 49 (4), 508-537.

Idrobo, N., D. Mejía y A. M. Tribin. 2014. "Illegal gold mining and violence in Colombia". *Peace Economics, Peace Science and Public Policy*. 20, 83-111.

InSight Crime. 2020. "Radiografía de la violencia contra líderes sociales en Colombia". Disponible en <https://es.insightcrime.org/noticias/analisis/violencia-lideres-sociales-colombia/>

IPC. s. f. Regiones: Bajo Cauca. Disponible en <http://ipc.org.co/index.php/regiones/bajo-cauca/>

Jaramillo, J., N. Londoño y G. Sánchez. 2015. "Agroindustria azucarera y finca tradicional en el norte plano del Cauca (Colombia): perspectivas históricas y claves etnográficas". *Memoria Social*. 19 (39), 30-47.

Jaramillo, S. 2014. "La paz territorial". Disponible en http://www.altocomisionadoparalapaz.gov.co/Prensa/Dis-cursos/Documents/La_Paz_Territorial_version_final.pdf

Martínez, A. 2018. "Un análisis de los patrones de violencia en la región del norte del Cauca posterior a los Acuerdos de paz". Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Mina, M. 1975. *Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca*. Publicaciones de La Rosca. Bogotá.

Montoya, C. 2013. "La finca tradicional: espacios de resistencia y reconfiguración de la identidad del campesino afro nortecaucano". Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Negrete, R. 2013. "Derechos, minería y conflictos. Aspectos normativos". En L. J. Garay (ed.). *Minería en Colombia. Fundamentos para superar el modelo extractivista* (pp. 23-54). Contraloría General de la República. Bogotá.

Observatorio de Procesos de Desarme, Desmovilización y Reintegración. 2011. "Caracterización del departamento de Nariño". Bogotá, febrero.

Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y DIH. 2006. "Panorama actual del bajo Cauca antioqueño". *Serie Geográfica*. 29.

Ortiz, O. 2018. "El SOS en Tumaco". *UN Periódico Digital*. 22 de enero. Disponible en <https://unperiodico.unal.edu.co/pages/blog/detail/el-sos-en-tumaco/>

Pacifista. 2020. "Estos son los 275 líderes sociales asesinados desde el inicio de la implementación". Disponible en <https://pacifista.tv/notas/lideres-sociales-asesinados-inicio-implementacion/>

Pares. 2018. "El limbo en el que vive el bajo Cauca". Disponible en <https://pares.com.co/2018/03/21/el-limbo-en-el-que-vive-el-bajo-cauca/>

-----, 2018. "PNIS tras dos años de la firma del Acuerdo". Disponible en <https://pares.com.co/2018/12/18/pnis-tras-dos-anos-de-la-firma-del-acuerdo/>

-----, "La lucha ancestral por la tierra en el norte del Cauca". Disponible en <https://pares.com.co/2020/04/30/la-lucha-ancestral-por-la-tierra-en-el-norte-del-cauca/>

"Plan de desarrollo departamental del Cauca 2012-2015. Cauca todas las oportunidades". Disponible en http://www.fundaciondelmacizo.org/wp-content/uploads/2012/08/CAUCA_Todas_las_oportunidades.pdf

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). 2012. "Regiones en conflicto: comprender para transformar. Bajo Cauca, Huila, Meta, Montes de María y Nariño". *Colección Cuadernos INDH 2011*. PNUD. Bogotá.

-----, 2015. "Antioquia: retos y prioridades del departamento 2016-2019". PNUD.

Quintero, G. 2019. "Tumaco, la suma de todos los miedos". *Semana Rural*. 17 de marzo. Disponible en <https://semanarural.com/web/articulo/el-temor-se-apodera-de-tumaco-/871>

Ramírez, A. 2017. "Extractivismo y políticas espaciales en la cuenca media del río Quinamayó, Santander de Quilichao, Cauca. 1993-2015". Tesis de pregrado. Universidad del Cauca. Popayán.

Rasmussen, S. e I. Valencia. 2018. "Gobernanza en el Pacífico sur: entre las rentas ilegales, el recrudecimiento de la violencia y la implementación escasa de los programas de desarrollo con enfoque territorial". *Análisis*. 2. Friedrich-Ebert-Stiftung-Observatorio Colombiano de Violencia y Gobernanza.

Red de Derechos Humanos del Suroccidente de Colombia. 2020. *Informe especial: Situación de emergen-*

cia por vulneraciones a los DDHH en el Departamento del Cauca. Red de Derechos Humanos del Sur Occidente de Colombia "Francisco Isaías Cifuentes"-Red por la Vida y los Derechos Humanos del Cauca. Popayán.

Restrepo, E. 2017. "Afrodescendientes y minería: tradicionalidades, conflictos y luchas en el norte del Cauca". *Vibrant*. 14 (2), 1-15.

Restrepo, J. y D. Aponte. 2009. *Guerra y violencias en Colombia*. Cerac-Universidad Javeriana. Bogotá.

Ricaurte, M. 2013. "El paisaje geográfico de Caloto. Reflejo del conflicto armado en el norte del Cauca". *Revista Cultural Investigativa*. 6, 78-95.

Rimisp, Centro Latinoamericano para el Desarrollo Rural. 2017. *Bitácora & Territorio*. Producto No. 2. Lectura Territorial de San Andrés de Tumaco.

Ríos, J. y E. Gago. 2018. "Realidades y desafíos de la paz territorial en Colombia". *Papers: Revista de Sociología*. 103 (2), 281-302.

Rodríguez, D. y E. Cepeda. 2011. "Concentración de la tierra en Colombia". *Comunicaciones en Estadística*. 4 (1), 29-42.

Salcedo, A., I. Vélez, D. Varela y D. Rátiva. 2013. *Arreglos estatales, migraciones forzadas y confinamientos: cartografías históricas en la cuenca alta del río Cauca*. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.

Sánchez, G. 2015. "Permanecer y tejer redes: resistiendo al despojo y al acaparamiento de tierras en el norte plano del Cauca". Tesis de pregrado. Pontificia Universidad Javeriana. Bogotá.

Taussig, M. y A. Rubbo. 2011. *Esclavitud y libertad en el valle del río Cauca*. Universidad de los Andes. Bogotá. 1ª edición 1975.

Torres, A. 2019. "Dinámicas de acaparamiento y concentración de la tierra en Colombia. El caso de la agroindustria de la caña de azúcar". *Revista Controversia*. 212, 107-141.

Trujillo, D., D. Rojas y N. López. 2018. "Desbordamiento del extractivismo minero en Colombia: el caso de Suárez, Cauca". *Revista CS*. 26, 174-201.

Universidad ICESI y FIP. 2019. "Calidad y eficacia de la participación ciudadana en espacios de los Programas de

desarrollo con enfoque territorial en Alto Patía-Norte del Cauca y Pacífico medio". Informe.

Unodc. 2016. *Caracterización regional de la problemática asociada a las drogas ilícitas en el departamento de Cauca*. Observatorio de Drogas de Colombia. Bogotá.

-----, 2017. *Colombia: monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2016*. Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2017/julio/CENSO_2017_WEB_baja.pdf

-----, 2019. *Colombia: monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2018*. Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2019/Agosto/Informe_de_Monitoreo_de_Territorios_Afectador_por_Cultivos_Illicitos_en_Colombia_2018_.pdf

-----, 2020. *Colombia: monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos 2019*. Disponible en https://www.unodc.org/documents/colombia/2020/Julio/Informe_Monitoreo_de_Territorios_Afectados_por_Cultivos_Illicitos_2019.pdf

Upra. 2016. *Análisis de la distribución de la propiedad rural en Colombia. Propuesta metodológica*. Upra. Bogotá.

Urrea, F. y C. Mejía. 1999. "Culturas empresariales e innovación en el Valle del Cauca". Disponible en <https://studylib.es/doc/7228370/culturas-empresariales-e-innovaci%C3%B3n-en-el-valle-del-cauca>

Urrea, F. y T. Hurtado. 1997. "Puerto Tejada de núcleo urbano de proletariado agroindustrial a ciudad dormitorio". En F. Zuluaga (ed.). *Puerto Tejada 100 años*. Publicación gubernamental local.

Valencia I. y L. Silva. 2018. "Entre subsistencias y neoextractivismos locales. Dinámicas mineras en el norte del Cauca, Colombia". *Estudios Políticos*. 52, 172-193.

Vanegas, Á., D. Calderón y A. Vélez. 2018. *Las disidencias de las Farc: un problema en auge*. Informes 30. Disponible en <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1662>

Vélez, I. 2018. "Una mirada histórica y socio-ambiental para repensar y renombrar los conflictos entre comunidades étnicas del alto Cauca, Colombia". *El Ágora U*. 18 (1).

Vélez, I., D. Varela, S. Rátiva y A. Salcedo. 2013. "Agroindustria y extractivismo en el alto Cauca. Impactos sobre los sistemas de subsistencia afro-campesinos y resistencias (1950-2011)". *Revista CS.* 12, 159-187.

Zuluaga, H. 2003. "Agroindustria en el Norte del Cauca: una mirada histórica". *Revista Científica Guillermo de Ockham.* 6 (2), 101-111.

Prensa

Diario del Sur. 2016. "Exterminio de los Awá, nadie lo para". Disponible en <https://diariodelsur.com.co/noticias/opinion/editorial/exterminio-de-los-awa-nadie-lo-para-234250>

El Espectador. 2018. "Crímenes de Farc y Fuerza pública en norte del Cauca, el Caso 005 de la JEP". *El Espectador.* Disponible en <https://www.elespectador.com/colombia2020/justicia/jep/crimenes-de-farc-y-fuerza-publi-ca-en-norte-del-cauca-el-caso-005-de-la-jep-articulo-857375>

-----, 2018a. "Líderes". Tatiana Acevedo. Disponible en <https://www.elespectador.com/opinion/opinion/lideres-columna-613744/>

-----, 2019. "Duque simula implementar la paz, mientras desmonta el Acuerdo: plataformas de DD. HH.". Disponible en <https://www.elespectador.com/colombia2020/pais/duque-simula-implementar-la-paz-mientras-desmonta-el-acuerdo-plataformas-de-ddhh-articulo-882733/>

-----, 2019a. "Autodefensas Gaitanistas de Colombia envían panfleto amenazante a líderes sociales". *El Espectador.* Disponible en <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/autodefensas-gaitanistas-de-colombiaenvian-panfleto-amenazante-lideres-sociales-articulo-837243>

-----, 2019b. "Un nuevo líder social asesinado en Tarazá, en el bajo Cauca antioqueño". Disponible en <https://www.elespectador.com/noticias/judicial/un-nuevo-lider-social-asesinado-en-taraza-en-el-bajo-cauca-antioqueño-articulo-894772>

-----, 2020. "Los hechos que rodean la desaparición de un líder comunal en el bajo Cauca". Disponible en <https://www.elespectador.com/colombia2020/territorio/>

los-hechos-que-rodean-la-desaparicion-de-un-lider-comunal-en-el-bajo-cauca-articulo-918463

El Herald. 2019. "Asesinan a dos líderes sociales en 24 horas". 26 de diciembre. Disponible en <https://www.elheraldo.co/colombia/asesinan-dos-lideres-sociales-en-24-horas-689758>

El Nuevo Liberal. 2017. "Más de 15 mil familias caucanas se han acogido al programa para sustituir cultivos ilícitos". *El Nuevo Liberal.* Disponible en <https://elnuevo-liberal.com/mas-de-15-mil-familias-caucanas-se-han-acogido-al-programa-para-sustituir-cultivos-ilicitos/>

El País. 2020. "Un hombre y una bebé de nueve meses murieron en ataque armado en Suárez, Cauca". *El País.* Disponible en <https://www.elpais.com.co/judicial/un-hombre-y-una-bebe-de-nueve-meses-murieron-en-ataque-armado-en-suarez-cauca.html>

El Tiempo. 2016. "Un policía muerto y 10 personas heridas tras disturbios en el Cauca". *El Tiempo.* Disponible en <https://www.eltiempo.com/archivo/documento/CMS-16726973>

-----, 2018. "Asesinan a líder social y a una mujer en Tarazá, Antioquia". Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/asesinan-dos-personas-una-de-ellas-lider-social-en-taraza-antioquia-309596>

-----, 2019. "La odisea de hacer política en medio del fuego cruzado en Antioquia". Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/riesgo-en-el-bajo-cauca-antioqueño-para-candidatos-410822>

-----, 2019a. "Los últimos días de vida de la candidata Karina García Sierra". Disponible en <https://www.eltiempo.com/elecciones-colombia-2019/otras-ciudades/ultimos-dias-de-vida-de-la-candidata-karina-garcia-sierra-409916>

-----, 2020. "Ola de homicidios recrudecen la violencia en el bajo Cauca antioqueño". Disponible en <https://www.eltiempo.com/colombia/medellin/ola-de-homicidios-recrudecen-la-violencia-en-el-bajo-cauca-antioqueño-453106>

-----, 2020. "Los riesgos por el coronavirus para 32 sacerdotes en Tumaco". Disponible en <https://www.>

eltiempo.com/colombia/cali/los-riesgos-por-el-coronavirus-para-32-sacerdotes-en-tumaco-493842

Las2Orillas. 2020. "La violencia en el Cauca en tiempos de cuarentena". Disponible en <https://www.las2orillas.co/la-violencia-en-el-cauca-en-tiempos-de-cuarentena/>

Noticias Caracol. 2019. "Colombia negra, Tumaco". Especial 24 de agosto Disponible en <https://www.youtube.com/watch?v=6lNYgt5anIA>

Proclama Cauca y Valle. 2019a. "Norte del Cauca y Alto Patía, prioridades PDET". Disponible en <https://www.proclamadelcauca.com/norte-del-cauca-y-alto-patia-prioridades-pdet/>

-----, 2019b. "Gobernación del Cauca benefició a 1.300 familias campesinas". Disponible en <https://www.proclamadelcauca.com/gobernacion-del-cauca-beneficio-a-1300-familias-campesinas/>

Semana. 2018. "El "triángulo de oro" de cannabis". *Semana*. Disponible en <https://www.semana.com/nacion/articulo/norte-del-cauca-se-produce-la-variedad-de-marihuana-mas-potente/587503>

-----, 2019. "¿Por qué la oposición asegura que Duque enredó la paz?". *Semana*. Disponible en <https://www.semana.com/nacion/articulo/oposicion-le-hace-corte-de-cuentas-al-acuerdo-de-paz-en-el-gobierno-duque/626887>

-----, 2019a. "Cuatro soldados murieron en ataque en el bajo Cauca". *Semana*. Disponible en <https://www.semana.com/nacion/articulo/cuatro-soldados-murieron-en-enfrentamientos-en-el-bajo-cauca/630423>

-----, 2020. "Las barreras indígenas en el Cauca para contener la pandemia". *Semana*. Disponible en <https://www.semana.com/nacion/articulo/coronavirus-indigenas-del-cauca-cerraron-sus-territorios/662534>

Verdad Abierta.com. 2012. "Los orígenes de la masacre de El Naya". *Verdad Abierta*. Disponible en <https://verdadabierta.com/los-origenes-de-la-masacre-de-el-naya/>

-----, 2015. "Legalizar la minería en el bajo Cauca: ¿experimento fallido?". Disponible en <https://verdadabierta.com/legalizacion-de-la-mineria-en-bajo-cauca/>

-----, 2017. "¿Qué hay detrás del asesinato de un líder cocalero en Tarazá?". Disponible en <https://verdadabierta.com/que-hay-detras-del-asesinato-de-un-lider-cocalero-en-taraza/>

-----, 2018. "Reacomodo de grupos armados ilegales impacta con fuerza a Cauca". *Verdad Abierta*. Disponible en <https://verdadabierta.com/reacomodo-grupos-armados-ilegales-impacta-fuerza-cauca/>

-----, 2019. "En Antioquia, comunidades esperan las inversiones del posconflicto". Disponible en <https://verdadabierta.com/en-antioquia-comunidades-esperan-las-inversiones-del-posconflicto/>

ACERCA DE LOS AUTORES Y LAS AUTORAS

Juan Guillermo Albarracín. Politólogo con opción (Nebenfach) en economía y M. A. en política comparada por la Eberhard-Karls Universität Tübingen (Alemania), así como M. A. y PhD en ciencia política por la University of Notre Dame (Estados Unidos). Director del Programa de Ciencia Política y profesor asistente del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI (Cali).

Juan Pablo Milanese. PhD en ciencias política y sociales y MA en relaciones internacionales por la Universidad de Bolonia. MSc en ciencias y sistemas de información geográfica por la Universidad de Salzburgo. Licenciado en ciencia política por la Universidad de Buenos Aires. Jefe del Departamento de Estudios Políticos de la Universidad ICESI.

Margarita Navarro De Arco. Antropóloga por la Universidad del Magdalena, estudiante de la maestría en estudios sociales y políticos de la Universidad ICESI. Docente e investigadora. Actualmente trabaja las líneas de investigación de movimientos sociales, cambios institucionales y partidos políticos.

Lizeth Sinisterra Ossa. Licenciada en historia por la Universidad del Valle (Cali); magíster en estudios sociales y políticos por la Universidad ICESI. Gerente de Pacífico Task Force y profesora del Departamento de Estudios Sociales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad ICESI.

SOBRE ESTE PROYECTO

Presente en el país desde 1979, la Friedrich-Ebert-Stiftung en Colombia (Fescol) busca promover el análisis y el debate sobre políticas públicas, apoyar procesos de aprendizaje e intercambio con experiencias internacionales y dar visibilidad y reconocimiento a los esfuerzos en la construcción de paz.

Como fundación socialdemócrata, nos guían los valores de la libertad, la justicia y la solidaridad. Mediante nuestras actividades temáticas, ofrecemos un espacio de re-

Inge Helena Valencia. Phd en Antropología por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales (EHESS) Francia. Antropóloga de la Universidad Nacional de Colombia. Profesora Asociada y jefa del Departamento de Estudios Sociales de la Universidad ICESI.

PIE DE IMPRENTA

Friedrich-Ebert-Stiftung (FES)
Calle 71 n° 11-90 | Bogotá-Colombia

Responsable

Kristina Birke Daniels
Directora del Proyecto Regional de Seguridad
y representante de la FES Colombia

Saruy Tolosa
Coordinador de proyectos
saruy.tolosa@fescol.org.co

Bogotá, septiembre de 2020

flexión y análisis de la realidad nacional, promoviendo el trabajo en equipo y las alianzas institucionales con universidades, centros de pensamiento, medios de comunicación, organizaciones sociales y políticos progresistas. En el marco de estos esfuerzos desarrollamos grupos de trabajo con expertos (académicos y técnicos) y políticos, así como foros, seminarios y debates. Además, publicamos *policy papers*, análisis temáticos y libros.

Para más información, consulte

<https://www.fes-colombia.org>

VIOLENCIA Y ÓRDENES POLÍTICOS LOCALES EN EL POSACUERDO: LAS DINÁMICAS TERRITORIALES EN EL NORTE DEL CAUCA, EL BAJO CAUCA ANTIOQUEÑO Y TUMACO



Luego de la firma del Acuerdo de paz en 2016 entre el gobierno nacional y la guerrilla de las Farc se esperaba la disminución de los hechos violentos generados por los actores armados. Sin embargo, el panorama actual muestra que en muchas zonas del país la violencia se recrudeció y siguió vinculada a las economías ilegales y a enfrentamientos entre grupos armados organizados.

El narcotráfico, la minería ilegal y los grupos armados criminales se relacionan con la violencia ejercida contra líderes sociales. Sin embargo, reducir las causas de esta violencia solo a la búsqueda de lucro en mercados ilegales simplifica cómo en regiones periféricas



dichos grupos participan de la construcción y el sostenimiento de órdenes sociales y políticos. Además de regular aspectos de la vida social ligados a la producción y el tráfico de mercancías ilegales, en muchas ocasiones y en conjunto con otros actores locales políticos, esos grupos se constituyen en autoridades que determinan reglas de comportamiento e imponen sanciones.

Esta investigación caracteriza y analiza cómo se presentan estas dinámicas de violencia en el pos Acuerdo, dando una mirada multirregional para entender cómo se establecen estos órdenes sociales y políticos en tres territorios periféricos-rurales: el municipio de Tu-



maco, el norte del Cauca y el bajo Cauca antioqueño. Territorios con características muy similares debido a que presentan una gran concentración de rentas ilegales y a la presencia de grupos armados organizados: Bacrim, disidencias de las Farc y ELN.

Las conclusiones muestran que la presencia de economías ilegales en esas regiones está estrechamente relacionada con el recrudecimiento de la violencia y es un factor clave asociado a las dinámicas de violencia contra líderes sociales. Asimismo, que la ubicación y la geografía son claves para el desarrollo de estas actividades. Por último, que es necesario explorar cómo están regulados estos mercados ilegales y de qué manera los actores armados participan de la construcción de órdenes sociales locales.